CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

COMISIÓN CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA

celebrada el jueves, 7 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DÍA:

- **Dictaminar el Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Número de expediente 621/000009).**

Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Como es preceptivo, procede aprobar, con carácter previo a la tramitación del orden del día, el acta de la anterior sesión, celebrada el pasado día 29 de noviembre.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobada.

A continuación, pasamos al debate del orden del día, integrado por un punto único: dictamen del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que se tramita, como sus señorías conocen, por el procedimiento de urgencia.

La Ponencia de esta Comisión informó el proyecto el pasado 5 de diciembre en el sentido de mantener como

texto del informe el remitido por el Congreso de los Diputados. Así pues, conforme al artículo 116 y 121, aplicado por analogía, y a los precedentes de la Comisión en pasadas legislaturas, esta Presidencia, oída la Mesa y los portavoces, ha acordado la siguiente tramitación, de la que informo a la Comisión.

En primer lugar, debate y votación de los vetos por su orden de presentación. Se han presentado tres vetos, correspondiendo dos al Grupo Parlamentario Mixto y uno al Grupo Parlamentario Socialista. Habrá un turno a favor de los vetantes de forma consecutiva y, al finalizar el turno a favor del tercer veto, pasaremos a los turnos en contra y los turnos de portavoces del resto de los grupos para, a continuación, proceder a la votación de estos tres vetos.

En segundo lugar, abriremos el debate y votación del informe, que se iniciará con el debate de las enmiendas

presentadas por los grupos parlamentarios, por orden de presentación, con turno a favor de todos los grupos que las hayan presentado y, al finalizar todos los turnos a favor, realizaremos los turnos en contra, si hubiera el caso, y los turnos de portavoces para la fijación de posiciones, de modo conjunto.

Al finalizar esta segunda parte, procederemos a las votaciones del informe si no hay aceptación de enmiendas, o de las enmiendas en el caso de que las hubiera.

Por tanto, iniciamos en este momento el debate del veto número uno, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: En principio, quiero plantear que hay un veto presentado por mi compañero del Grupo Mixto, Anxo Quintana, que doy por defendido y, en su momento, anunciaré lo mismo respecto de sus enmiendas.

Por parte de Izquierda Unida planteamos la siguiente cuestión. Nos parece una ley tremendamente injusta y, desde luego, francamente regresiva en relación con la Ley 4/2000 que hace muy poco tiempo se aprobó.

Voy a pedir indulgencia a la Presidencia de esta Comisión. Después daré por defendidas prácticamente todas las enmiendas, menos dos o tres que quiero destacar, pero voy a manifestar en este veto cuál es la posición de mi Grupo en torno a esta Ley.

El fenómeno migratorio es universal y se ha dado a lo largo de la historia, y en estos momentos es un tema también de justicia o injusticia entre el mundo rico y el mundo pobre. No se pueden poner tantas puertas al campo porque existe un nivel de pobreza tal en el mundo que hace que el fenómeno migratorio sea imparable, salvo que los países pobres sean menos pobres y, en consecuencia, no tengan necesidad de emigrar. Se calcula que el año 2000 la mitad de la población del África subsahariana tendrá ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El 20 por ciento más pobre de la población mundial percibía, en el año 1960, el 2,3 por ciento del ingreso mundial —2,3 pesetas por cada cien—. En la actualidad, percibe el 1,1 por ciento —1,1 pesetas de cada cien—. La riqueza de las siete personas más acaudaladas del mundo permitiría que todos los habitantes accedieran a los servicios sociales básicos. Mil doscientos millones de personas no tienen acceso a agua potable, el 20 por ciento de la población mundial. La esperanza de vida es de menos de 40 años para 507 millones de seres humanos. Hay 158 millones de personas menores de 5 años que sufren desnutrición. Más de 840 millones son analfabetos; 538 millones de mujeres en total. Las mujeres ganan, por un mismo trabajo, tres cuartas partes menos de lo que perciben los hombres, mientras asumen una carga desproporcionada de responsabilidades domésticas, como criar a los hijos, etcétera, en el llamado tercer mundo.

Por tanto, partiendo de estos datos para justificar esencialmente que el fenómeno migratorio es un problema de justicia y de mal reparto de la riqueza a escala mundial, hago la siguiente consideración en cuanto a esta reforma.

La reforma que plantea el Gobierno en su proyecto de ley elimina de un plumazo la mayoría de los avances conseguidos en la Ley 4/2000, particularmente en todo lo que venimos a llamar núcleo duro, de las políticas migratorias: las entradas —visados, rechazo en frontera, reagrupación familiar— y las salidas —retenciones y expulsiones, centros de internamiento.

Pero contiene, además, elementos que constituyen un retroceso sobre la ley de 1985 y que, en algunos casos, pueden ser contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales, tales son las disposiciones que prevén la detención cautelar de extranjeros o las limitaciones de los derechos de asociación, de sindicación y de huelga.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno del Partido Popular responde a una visión estrictamente policial de la emigración, donde el control de la entrada y la ilegalización de los irregulares se convierten en sí mismos en los elementos básicos de la política migratoria. Tal concepción lleva inevitablemente aparejada la proliferación del negocio de las mafias que trafican con personas y la exigencia de un mercado laboral secundario, de un contingente de mano de obra de segundo orden y bajo coste salarial, con escasas posibilidades de exigir derechos dada su inseguridad jurídica, cuando no clandestino y más fácilmente explotable.

A la hora de justificar esta nueva ley, hay que partir de la actualmente vigente, la 4/2000, que lleva en vigor un tiempo muy escaso, sólo unos cuantos meses. Durante su reducida vigencia, ha quedado patente la nula voluntad política del Ejecutivo para aplicarla. Esta carencia de voluntad en su aplicación se constata gráficamente en el hecho de que ni siquiera se han planteado su desarrollo reglamentario, como todo el mundo conoce, en el que se podría haber contado con la opinión constructiva de los agentes sociales, al igual que ocurrió con el vigente Reglamento del año 1996. En consecuencia, entendemos que se ha perdido una buena oportunidad de aunar esfuerzos con vistas a abordar el desarrollo de una política migratoria consensuada y realista.

Derivado de lo anterior, también resulta injustificado pretender argumentar a favor de la necesidad de reforma el hecho de haber detectado problemas durante la aplicación de la ley simplemente porque dicha ley no se ha aplicado por el Ejecutivo. Sin embargo, no se menciona que aquellos aspectos de la ley que sí se han aplicado —asistencia jurídica, acceso a la sanidad, etcétera— se han desarrollado con total normalidad, desvirtuando la inicial oposición de algunos sectores del Gobierno que auguraban caos en la aplicación del mandato de la Ley 4/2000 en dichos aspectos.

Quizás sea ése el motivo, porque ha habido toda una campaña que realmente ha provocado alarma social, por lo que se intenta justificar su modificación sobre la base de que esta ley favorece, como es lógico, lo irregular: favorece a las mafias, favorece muchas cosas perversas del problema de la emigración. De ahí que se plantee su modificación. Estamos convencidos de que ninguna ley, sea rígida o flexible, como decía al principio, va a cambiar las tendencias profundas del fenómeno migratorio. Porque,

además, en España, por ejemplo, hay necesidades de mano de obra barata y, en términos generales, con el expolio y desvertebración de los países del tercer mundo se justifica todo lo que viene a continuación.

De ahí nuestro convencimiento de que las políticas represivas policiales de cierre de fronteras a cal y canto no harán otra cosa que aumentar el sufrimiento humano y profundizar en las injusticias, como decía, de las relaciones Norte-Sur.

Existen, por tanto, algunos elementos básicos de toda esta modificación, que afectan a varias cuestiones. Creemos que tiene que haber leyes que impidan la arbitrariedad de los gobiernos, la sobreexplotación laboral o el tráfico de personas por las mafias y que, además, garanticen la seguridad jurídica y la igualdad de los derechos. Sin embargo, esta ley que se nos propone plantea algunas cuestiones que me gustaría resaltar.

Sobre los derechos cívicos y políticos de los extranjeros, debo decir lo siguiente. El derecho de los emigrantes al sufragio en las elecciones municipales, que en la ley vigente, se configura en los términos que establezcan las leyes y los tratados, en el proyecto de ley que se nos presenta se vincula a criterios de reciprocidad. Considerando la participación política un requisito básico de cualquier política de integración, resulta que, a partir de ahora, si no hay reciprocidad con respecto al país de origen del que procede el inmigrante, no podrá ejercitar ese derecho según el proyecto de ley que se nos presenta. Nos parece una barbaridad, porque un país desarrollado y democrático como el nuestro debería garantizar, por encima de todo, los derechos políticos de los emigrantes.

Los extranjeros ya no participarían a través de sus representantes en los debates y decisiones municipales que les conciernen, porque en el proyecto que se presenta se dice que podrán ser oídos, sin más. El derecho de asociación, de sindicación y de huelga se reconoce exclusivamente a los extranjeros que residen legalmente —entre comillas— en España, por tanto, hay situaciones en las cuales se afecta, como sucede en este caso, a derechos, contraviniendo el pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU y los convenios 87 y 88 de la OIT, suscritos por España, que garantizan la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Esa misma limitación de los derechos de reunión y manifestación aplicada en el proyecto de ley contraviene también lo dispuesto al respecto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporados a la Constitución española, que hemos celebrado en el día de ayer.

Sobre garantías jurídicas, como dictaminó la Comisión Jurídica del Foro de la Emigración, el proyecto de reforma elimina el completo dispositivo de garantías jurídicas aplicables a los extranjeros, con independencia de su situación, que recoge la Ley 4/2000: tutela judicial efectiva, recurso contra sus actos administrativos, asistencia jurídica gratuita, etcétera.

Sobre los derechos sociales universales, sólo expondré una cuestión. En cuanto a la asistencia sanitaria, tendrán derecho a ella, como en la ley actual, las personas inscritas

en el padrón municipal. Hasta aquí, de acuerdo. El problema es que, no encontrándose en situación legal —entre comillas— y con el expeditivo sistema de expulsiones que plantea la reforma, ¿irá a inscribirse en el padrón municipal algún emigrante en situación ilegal?

Reagrupación familiar. Se elimina el derecho de los familiares a la residencia y a reagruparse con quien reside en España. Es el residente quien ostenta en exclusiva el derecho de reagrupación. En el caso de ser cónyuge de residente la persona reagrupada y los familiares con ella reagrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial, pero sólo si cumplen el tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos, a establecer reglamentariamente. No lo conocemos. No sólo se niega la presunción de validez del matrimonio que recoge el Código Civil sino que, además, el tiempo de convivencia previa en el país de origen no será tenido en cuenta. Se elimina la posibilidad de reagrupar a otros familiares por razones humanitarias —letra e) del artículo 7 de la actual ley, que se quiere suprimir.

También se elimina en la reforma la posibilidad de reagrupación de familiares extranjeros de españoles al suprimir lo dispuesto en la letra f) del artículo 17 de la Ley 4/2000.

Sobre entrada y política de visados, se eleva a rango de ley el libre arbitrio —hay que decirlo así— de las policías de frontera, que podrán rechazar e impedir la entrada a quienes no presenten a su llegada los documentos que justifiquen el objeto y condiciones de su estancia, sin más concreción, además de los medios de vida suficientes, etcétera.

Singular por su dureza, en nuestra opinión, es la modificación radical del artículo 25 de la ley actual, relativo a los visados, que barre sin contemplaciones los mínimos avances conseguidos, ligando los visados indisolublemente al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como la política de emigración, la política económica y la de seguridad ciudadana. Todo queda a expensas de futuros reglamentos, si bien aclara que la delegación de visado, que ahora ha de ser motivada en todos los casos, sólo lo será cuando se trate de reagrupación familiar o de trabajar, previa autorización, por cuenta ajena. Es decir, ahora ya no hace falta motivar la inmensa mayoría de los casos. Serán las compañías de transportes las responsables, —según el proyecto de ley que se nos presenta—, de controlar el cumplimiento de los requisitos de entrada, so pena de fuertes sanciones, con lo que esto supone de agravamiento de los márgenes de inseguridad y, por tanto, de indefensión de los emigrantes. Piénsese, en cualquier caso, en el efecto que ello tendría sin la menor duda para posibles solicitantes de asilo político.

Sobre permisos de estancia, de residencia, trabajo, contingentes o cupos, eliminar lo que ya se conoce como regularización permanente, es decir, la posibilidad de obtener la residencia tras dos años de estancia en el país —contenida en el artículo 29.3 de la Ley 4/2000—, según la propuesta de modificación de este artículo, será potestad de la Administración. Podrá conceder, dice, el otorgamiento del

permiso temporal a aquellos que acrediten una permanencia en territorio español durante un período mínimo de cinco años, aunque para mayor inquietud los requisitos a cumplir se determinarían según el reglamento posterior que nos pueda llegar.

En cuanto a la residencia permanente —artículo 30 de la Ley 4/2000—, el proyecto de ley exige que los cinco años de residencia temporal sean continuados. Es decir, si hay personas que no han tenido la posibilidad de tener esa residencia temporal continuada, la posibilidad de residencia queda anulada y, por tanto, tendrán que llegar a tener cinco años consecutivos de residencia temporal.

No quiero abusar del tiempo; por tanto, aunque podría mencionar otros muchos argumentos, me voy a referir algunas cuestiones más.

Lo más extraordinario, sin embargo, es la modificación del artículo 38, que elimina su punto 1, que es de suma importancia, ya que es donde se establece la diferencia o la independencia entre las ofertas de empleo canalizadas por el régimen general y las que se formulan vía contingente. Por otra parte, el silencio administrativo en la resolución de solicitudes de permisos será negativo; eso significaría que la solicitud queda desestimada salvo en los casos de prórroga del permiso de residencia o de renovación del permiso de trabajo, en que el silencio administrativo se considera positivo. Ahora es positivo en todos los casos. Es decir, ante el silencio administrativo la solicitud se entiende otorgada. Por tanto, menos problemas para la Administración y más para los inmigrantes.

Por último, expulsiones y sanciones. Junto con los controles de entrada —punto fundamental de esta reforma— se pretende, sin tapujos, poder expulsar a cualquier extranjero que esté en situación administrativa irregular, volviendo exactamente a los mismos postulados de la Ley de Extranjería de 1985. He de destacar, sin embargo, que si prospera esta reforma, las infracciones de las letras a), b) y c) del artículo 49 de la Ley 4/2000, donde se dice: Encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido o tener caducados los papeles; trabajar sin permiso de trabajo, etcétera —que actualmente se sancionan con multa—, podrán ser motivo de expulsión a partir de esta reforma que se nos plantea.

Estas medidas más la eliminación de la regulación permanente del artículo 29.3 generarían enormes bolsas de ilegales condenados a expulsión o a unas condiciones de vida totalmente clandestinas cuyo único amparo serían las mafias en este caso.

En definitiva, entendemos que este proyecto contiene una serie de medidas realmente lesivas para el mundo de la emigración. Lógicamente, la inmensa mayoría de la gente que viene a nuestro país, salvo aquellos que por motivos diversos caen en manos de las mafias o de personas indeseables, como ocurre en todo proceso de estas características, viene a trabajar huyendo del hambre y de la pobreza. Además, en este caso concreto tenemos, más que la sospecha casi la certeza, de que al foro de la emigración, a las asociaciones de emigrantes, se les va a dar un papel menos relevante porque a ese foro se le plantea que van a jugar un papel para la integración social de los emigrantes con el

objeto de que su participación quede reducida a asuntos de integración sin que puedan intervenir en el ámbito global de la regularización de la emigración, un papel destacado que han tenido hasta la fecha.

Por estas y otras razones vamos a defender en el Pleno la enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, salvo que fuese muy corregido a partir de las enmiendas de otros grupos —del mío lógicamente—. Pero no creo que eso vaya a ser así dado que la política que se ha aplicado hasta el momento ha sido como la del Talgo: han cogido la senda de los rieles, y el tren no para.

En su momento esa ley no gustó al Gobierno. Es una ley que se quiere modificar a los pocos meses de su aprobación sin un reglamento desarrollado. A partir de aquí el Gobierno ha lanzado esta cuestión en su campaña electoral, y después de la misma, y en mi opinión ha creado incluso una fuerte alarma en las distintas comunidades de inmigrantes produciendo una inseguridad ahora mismo impresionante.

Y ya termino. Yo no quiero una ley que no contenga los elementos básicos necesarios para defenderse en un Estado democrático y de Derecho ante cuestiones indeseables. Y lo que no quiero en absoluto es que este país se convierta en un país-fortaleza con una ley que nos retrotrae en algunos aspectos a la de 1985 y que en otros es regresiva en cuanto a aquellos derechos y libertades que hay que respetar para el conjunto de la humanidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cámara.

Queda entendido que ha defendido su veto y el del Senador Quintana, también del Grupo Parlamentario Mixto.

Por tanto, y siguiendo el orden del debate establecido, pasamos ahora a la defensa del veto del Grupo Parlamentario Socialista también por tiempo máximo de 15 minutos para lo cual tiene la palabra el Senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.

De acuerdo con lo que se ha hablado previamente en la reunión de Mesa y Junta de Portavoces, también defenderé las enmiendas números 99 a 108 por agilizar el debate y, sobre todo, porque muchas de ellas forman parte natural del propio veto. Por tanto, con el permiso de la Presidencia voy a plantear tanto el veto como las enmiendas números 99 a 108, ambas inclusive.

Con respecto al veto, la primera pregunta sería la siguiente: ¿Por qué los socialistas en el Senado hemos considerado oportuno plantear un veto? Queremos ser muy claros en esa respuesta. La razón del veto estriba en el tratamiento que se da a derechos y libertades de los extranjeros en situación irregular. Ésa y no otra es la razón del veto. El resto de enmiendas, hasta un total de 21, comprenden, sin duda, aspectos importantes, pero ninguna de ellas, excepto las que se refieren estrictamente a derechos y libertades de extranjeros que se encuentren en situación irregular en España hubieran determinado ese veto. Primera aclaración.

Segunda aclaración. En mi intervención aludiré en algún momento a la palabra «inconstitucionalidad». Viene al caso, por tanto, aclarar que, cuando así lo haga, en modo alguno pretendemos mantener una postura dogmática, porque no nos parece que el discurso de confrontar constitucionalidad o inconstitucionalidad sea particularmente relevante. En definitiva, inconstitucional —todos lo sabemos— es exactamente aquello que el Tribunal Constitucional dice que lo es, y no hay otra definición jurídica más precisa de ese concepto. Y sabemos, además —y partimos de ahí—, que en Derecho todo es argumentable y que los argumentos jurídicos siempre pueden estar al servicio de una u otra voluntad política. Sirva esto, por lo tanto, como preámbulo de mi intervención.

¿Qué ha pasado en este momento con la tramitación, tal y como lo vemos los socialistas, en torno a los derechos de aquellos que se encuentran en situación irregular? Sintetizando y, por tanto, con el riesgo de incurrir en alguna simplificación excesiva, se han mantenido dos discursos antagónicos: por un lado, un discurso que podría caracterizarse diciendo que estamos ante derechos y libertades que emanan directamente de la dignidad de las personas, derechos, por tanto, universales que no dependen de la condición de ciudadanía, y como tales derechos no susceptibles de restricciones. Ése sería uno de los planteamientos que nuestro Grupo mantuvo en el Congreso de los Diputados y que mantuvieron también otros grupos parlamentarios.

En el otro lado habría otro planteamiento —también con el mismo riesgo de simplificación que espero me disculpen sus señorías, pero lo hago en aras de la brevedad— que podría resumirse diciendo lo siguiente: no cabe, desde una situación de ilegalidad, ejercer y tener esos derechos. Son, por lo tanto, susceptibles de exclusión respecto de una categoría determinada de personas y, concretamente, serían los extranjeros que se encontrasen en una situación irregular en España. Y es verdad —y hay que decirlo— que esta segunda posición jurídicamente es argumentable y es evidente que así lo entendió el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

En suma, me gustaría centrar mi intervención en lo que yo creo que ha sido la razón del desencuentro: dos posiciones, con argumentos fundadas, sostenibles jurídica y políticamente, pero, desgraciadamente, confrontadas. Y diría más: es bien cierto que sería completamente legítimo que unos y otros siguiéramos manteniendo nuestros propios esquemas argumentales y todos tendríamos muy buenas razones. Desde el Grupo Popular, probablemente, la frase que lo resumiría sería la de cumplir con su compromiso electoral de reformar en una determinada línea esa Ley. Desde nuestro punto de vista, sería la necesidad de estar próximos a la sensibilidad de organizaciones humanitarias que plantean alternativas más cercanas a las que sostenemos nosotros y más cercanas, en definitiva, a nuestra tradición como Partido de defender a ultranza a los más débiles, y los más débiles de los más débiles seguramente son los irregulares extranjeros que se encuentran en España.

Las dos posiciones —insisto— serían igualmente legítimas. Pero nosotros —y para mí ésta es la clave de la intervención— queremos llegar a un acuerdo. Nosotros que-

remos que esta ley salga pactada y, si es posible, desde el Senado. Y lo queremos sinceramente por muchas consideraciones.

En primer lugar, porque pensamos —y algo de eso hablamos ya en la Ponencia— que una ley de estas características, si sale sin aval del principal partido de la oposición y otros importantes grupos políticos, desde el momento mismo de salida tendrá problemas de inseguridad. Sería una ley cuyo mensaje exterior sería: durará lo que dure la actual correlación de fuerzas políticas. Y esto, para una ley de esta naturaleza, es un grave problema, es un gran problema para todos los grupos representados en esta Cámara. No debemos, pues, dar una ley insegura.

En segundo lugar, queremos llegar a un acuerdo porque pensamos que es el presupuesto indispensable para lograr que el conjunto de los temas sobre inmigración sean políticas de Estado, y no políticas de partido. Por cierto, en modo alguno digo lo de partido en tono peyorativo, como a veces se utiliza, puesto que es perfectamente legítimo tener opciones partidarias distintas y alternativas. No obstante, también creemos los socialistas que sería fundamental que en un tema como el de la inmigración, que plantea gravísimos y numerosos problemas —y todas sus señorías los conocen—, que pueden generar dificultades graves en el auge de la xenofobia, el racismo, y que pueden crear serios problemas objetivos referentes a la canalización de la inmigración, en un tema como éste —digo— lo razonable sería que optáramos por una política de Estado. Y va a ser muy difícil sentar sobre una ley no consensuada una política de Estado. No digo que sea imposible, pero sí muy difícil.

Éstas son las razones políticas de fondo de por qué queremos llegar a un acuerdo.

A partir de ahí, el resto del análisis parece lógico. Si se quiere llegar a un acuerdo, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo en cualquier ámbito de la vida política? Partiendo los que sostienen estas dos posturas de pensar que no poseen toda la verdad, porque si aceptamos que una u otra es la posición verdadera y la contraria es la falsa, si no aceptamos que probablemente habrá contenidos reales en ambas posiciones, si no aceptamos que todos tendremos que renunciar a algo de nuestros puntos de partida para poder llegar a un acuerdo, simplemente, el acuerdo no es posible. Por tanto, metodológicamente, parece razonable orientar el trabajo hacia fórmulas eventualmente transaccionales.

No voy a entrar en muchos detalles sobre cuáles podrían ser, porque estamos en proceso de negociación —por cierto, una vez más, planteamos la queja de tener que hacer la tramitación por urgencia, señor Presidente y sé que la comparten todos los Grupos de la Cámara, sin excepción—, y aunque estemos apurados de tiempo, aún tenemos el suficiente —quizás, seis, siete días— y, por tanto, debemos apurar todos y cada uno de esos días, todas y cada una de esas horas, para intentar llegar a un acuerdo mediante fórmulas transaccionales. Estas fórmulas —que se nos ocurra a nosotros, probablemente, otros grupos podrán aportar otras sugerencias—, podrían tener dos orientaciones.

En primer lugar, que nos tomáramos rigurosamente en serio la extraña fórmula que recoge el proyecto —seamos

serios—, tal como vino del Congreso. Eso de que existan derechos que después no se pueden ejercer, en términos jurídicos, es muy raro. No sé si calificarlo como una especie de nuda propiedad de un derecho político, aunque ni siquiera como nuda propiedad, porque realmente no hay modo de transmitirlo a terceros. En definitiva, es una figura que jurídicamente se prestaría a toda clase de ironías y sarcasmos.

No obstante, cabe otra vía: tomársela en serio, pensar que puede tener un contenido. ¿Cuál? Probablemente, estaría en el ámbito de la legitimidad de la respuesta sancionadora, penal o administrativa a aquellas personas que siendo titulares de un derecho, sin embargo, no lo pueden ejercer cuando, de hecho, lo ejercieran. Realmente es sofisticado, pero es una posible explicación. Se trataría de vaciar de contenido sancionador la conducta para quienes, siendo titulares del derecho, sin embargo, la ley les prohíbe ejercerlo. Ésa es una vía que se podría traducir en fórmulas transaccionales.

Una segunda vía, en la que, personalmente, he de decir que confío más, es la de intentar —ya lo anticipábamos en Ponencia— trasladar el esquema de la Convención Europea de Derechos del Hombre, de esta Carta que, desgraciadamente, ya sabemos que no va a tener carácter vinculante en el Consejo Europeo de Niza, lo que creo, sinceramente, que late en el fondo de la Constitución, que, a su vez, como todos sabemos, es necesario interpretar precisamente a la luz de esas convenciones, e intentar partir de dos premisas. En primer lugar, concluir que, de acuerdo, por ejemplo, con el artículo 11 del Convenio de Roma, es verdad que esos derechos son susceptibles de restricción, es decir, que son derechos universales que no están vinculados a la ciudadanía, lo que no significa que no puedan ser objeto de restricciones. ¿Cuáles? Los previstos en la Convención Europea y en el resto de tratados internacionales. Ésta sería una línea.

Pero, como segundo aspecto, si eso supone un cambio matizado o transaccional de posición respecto de la que hemos sostenido en la tramitación en el Congreso de los Diputados, creo que el Partido Popular tendría que hacer un esfuerzo equivalente en otra dirección, esto es, darse cuenta de que no es suficiente el argumento de que estén en situación ilegal para la exclusión de derechos, por razones obvias que tampoco ahora voy a detallar y ojalá no haya que detallar más porque seamos capaces de encontrar un acuerdo antes de ello. En definitiva, supondría entender que desde la ilegalidad se tienen derechos. ¿Cómo no se van a tener? El Derecho Penal es un conjunto de derechos, de garantías y libertades que surgen desde la ilegalidad y, por tanto, ése no es un argumento fuerte. Y lo que es más interesante: habría que comprender que el análisis preciso de los textos internacionales nos dice que caben restricciones, pero nunca nos dice que pueda ser motivo de restricción el pertenecer a un colectivo determinado de personas caracterizado por el único rasgo común de estar en una situación irregular administrativamente. Podemos revisar cualquier tratado o texto internacional y veremos un catálogo más o menos amplio de restricciones, pero nunca se vinculan esas restricciones a que un colectivo de personas

se encuentre en una determinada situación irregular administrativa. Se vinculan a otras muchas cuestiones —la seguridad nacional, el orden público, la seguridad ciudadana, evitar el delito, respetar los derechos de los demás—, en definitiva, con unas u otras formulaciones, sí se prevén restricciones para todos por motivos objetivos, pero no restricciones o exclusiones de un colectivo de personas como titulares, como ejercientes efectivos de esos derechos.

Por ahí deberían ir los tiros, si se me permite la expresión, en un intento de transacción. Por ahí podríamos encontrar fórmulas y, desde luego, los socialistas estamos deseando trabajar y ayudar lealmente a encontrarlas.

En definitiva, se trata de una especie de veto, con el paradójico propósito de que sea retirado. Ése es el núcleo de nuestra intervención política.

A continuación, muy brevemente, paso a aludir puntualmente algunas de las enmiendas.

La enmienda número 99 está claro que decaería automáticamente si hubiese transaccional en los derechos, porque se trata de una desconfianza que surge por el tratamiento ulterior de los derechos, y no por un planteamiento objetivo. Por tanto, dependería su suerte también de que encontráramos fórmulas transaccionales.

Respecto de la número 100, debo decir, porque haya podido haber alguna confusión en la transmisión a la opinión pública, que ciertamente no pretendemos con dicha enmienda que los extranjeros puedan nombrar sus propios concejales o poco menos. Simplemente, tratamos de canalizar la participación de los extranjeros en la vida municipal, como se canaliza la participación de otros muchos colectivos tanto en los Plenos como en las demás instancias del Ayuntamiento.

Las enmiendas 101, 102 y 104 son claves, pero decaerían automáticamente si encontrásemos fórmulas transaccionales.

La enmienda número 103, que propone la inclusión de la Formación Profesional, es muy modesta en su planteamiento pero a la vez útil. Supone una concepción más amplia del derecho a la educación y, por razones estrictamente sociológicas, el modo más eficaz de contribuir a la integración de los inmigrantes en el tejido social de nuestro país.

Respecto a la enmienda número 105, nos limitamos a dar por reproducidos los argumentos contenidos en el texto, y lo mismo ocurre con la número 106.

La enmienda 107, que se refiere a la continuidad o no de la residencia, nos parece razonable. Es cierto que de un modo u otro puede existir fraude y, por eso, estaríamos dispuestos a aceptar alguna enmienda transaccional que evitara el riesgo de fraude pero que no tuviese en cuenta la continuidad de la residencia.

Finalmente, la enmienda 108 es de carácter estrictamente técnico.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Belloch.

Pasamos al turno en contra.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel por tiempo de quince minutos.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a dar por rechazado el veto que ha defendido, en nombre de su compañero de Grupo, el Senador Cámara; o dicho de otro modo, el Grupo Parlamentario Popular rechaza el veto sostenido por el Senador Quintana, perteneciente al Bloque Nacionalista Gallego.

Por lo que se refiere a la intervención —yo no la califico de veto— del Senador Cámara, de Izquierda Unida, tengo que decirle que no es un veto, y tanto es así que ha pedido la devolución del proyecto al Gobierno. Esto nos hace pensar que al Senador Cámara no le ha dado tiempo a preparar una verdadera enmienda de veto, porque nosotros no podemos devolver nada al Gobierno. Si esta Cámara veta algo, no lo devuelve al Gobierno, sino al Congreso de los Diputados. Por lo tanto, entiendo que nos pide un imposible.

Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones que ha vertido sobre que este proyecto es injusto y regresivo; es más, dice que ha tenido pocas modificaciones pero ha sucedido todo lo contrario, que ha sufrido gran cantidad de modificaciones en el trámite en Ponencia y en Comisión del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, Senador Cámara, usted no ha vetado el contenido de este ejemplar, sino el proyecto de ley tal y como entró en el Congreso de los Diputados. Sepa que las cuestiones a las que su señoría ha hecho referencia han variado plenamente: garantías jurídicas, reagrupación familiar, entrada y política de visados, permisos de estancia, contingente o grupos, las sanciones, la lucha contra las mafias y gente que trafica con seres humanos y el foro de la inmigración, que ya ni siquiera se llama así.

Haciendo una broma, Senador Cámara, nos decía que éramos como el Talgo: que hemos cogido la senda de los rieles y que no hemos parado. Déjeme que le devuelva la broma y le diga que usted está en vía muerta y que no va a ningún sitio. En cualquier caso, he de reconocerle algo, señor Senador, y es que es coherente con la postura mantenida por su Grupo en el Congreso de los Diputados y, aunque formalmente no haya planteado un veto, está en contra del proyecto a pesar de las modificaciones con las que ha entrado aquí. En lo que sí estoy de acuerdo con usted es en que el fenómeno migratorio es universal; en eso tiene usted toda la razón, pero nos oponemos frontalmente a lo dicho en el resto de su intervención.

Ahora quiero entrar en lo que sí considero un veto, el presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Le agradezco el guiño al Senador Belloch, pues estoy deseando que lo retire y al final de mi intervención se lo voy a pedir. Pero lo cierto es que yo no entiendo este veto, y es que lo formula un Grupo que en el trámite llevado a cabo en Comisión ha votado a favor de 52 de los 67 artículos de los que consta esta ley. Según el Reglamento, el veto es un instrumento con el que cuenta el Senado y que, en caso de prosperar, el rechazo del Senado a debatir un proyecto de ley se hace patente. No entiendo cómo se pretende recha-

zar este proyecto, cuando el Grupo que lo propone ha votado a favor la inmensa mayoría de sus artículos.

Seguramente, el Grupo Parlamentario Socialista tuvo sus dudas a la hora de plantear este veto, y les voy a explicar por qué. Si ustedes atienden a la lectura del párrafo tercero del veto que formalmente ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, verán que se reconocen los grandes avances que ha habido en la tramitación en el Congreso de los Diputados y la obtención de resultados satisfactorios. De este modo se refieren a la regularización de los extranjeros cuyas solicitudes fueron denegadas en el último proceso; la ampliación del derecho a la reagrupación familiar; establecimiento de un contingente anual de trabajadores extranjeros con participación de las Comunidades Autónomas e interlocutores sociales; el hecho de que las propias Comunidades Autónomas puedan elevar propuestas en materia migratoria en el ámbito de sus respectivos estatutos; el derecho a la defensa gratuita en los casos de expulsión, devolución y rechazo en frontera; la posibilidad de obtener el visado en frontera; la inclusión del concepto de arraigo como medio para lograr la regularización; el derecho a la educación obligatoria y gratuita para los extranjeros menores de 18 años, así como avances en un régimen sancionador más garantista.

Y digo que el Grupo Parlamentario Socialista tenía dudas, porque a mí me ha llamado la atención el guiño que se hace en el párrafo quinto al Ministro del Interior. No sé si en el fondo, pero al menos en la forma —como antes contraargumentaba el Senador de Izquierda Unida— es un veto, y una defensa tan seria y sosegada como la realizada por el Senador Belloch merece una contestación igual o parecida por parte de este Grupo.

Se cuestiona la constitucionalidad de la restricción del ejercicio de determinados derechos; se trata de los derechos civiles de reunión, de manifestación, de asociación, de huelga y de sindicación de los extranjeros que no han legalizado su situación en España. Coincido con el Senador Belloch en que todo es argumentable en Derecho, y por eso tengo que remitirme al artículo 13, apartados 1 y 2, de la Constitución Española. El primero de ellos dice: Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. El apartado 2 dice: Solamente los españoles serán los titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Es decir, el artículo 13.1 de la Constitución contempla la condición jurídica del extranjero desde el punto de vista de la comunidad política.

El ámbito objetivo de derechos de los extranjeros es extenso al ámbito del Título I del Tribunal Constitucional y su disfrute, como nosotros lo entendemos, puede atemperarse a lo que determinen los tratados y la ley. Si esto es así, y nosotros creemos que así es, da lugar a una distinción que genera tres grupos de derechos. En primer lugar, están los derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros, cuya regulación ha de ser igual para ambos sin posibilidad de atemperación respecto a los extranjeros. Me

estoy refiriendo, señorías, a los derechos de primera generación, a los que son básicos para la realidad plena de la dignidad humana, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal y a la seguridad.

El segundo grupo de derechos son los que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones locales.

Queda un tercer grupo de derechos, señorías, que son los derechos respecto de los cuales el artículo 13 de la Constitución reconoce a los tratados y a las leyes la posibilidad de establecer condicionamientos adicionales al ejercicio por parte de los extranjeros siempre que se respeten las prescripciones constitucionales; y aquí entran en juego derechos tan controvertidos —vean que han sido objeto no solamente del veto, sino de múltiples enmiendas por parte de los grupos parlamentarios— como son los de asociación, de reunión, de manifestación, de libertad sindical y de huelga.

Por tanto, la fórmula que este proyecto elige es respetuosa con la Constitución y con la doctrina del Tribunal Constitucional. Habrán de ser los tratados internacionales y la propia ley los que regulen los derechos y modulen su ejercicio por parte de los extranjeros.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular asumen plenamente esta interpretación del Consejo General del Poder Judicial, que ha llegado a esta conclusión a través del estudio de las múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, desde 1984 hasta hoy. Aún más, el Consejo de Estado ha emitido también una opinión claramente coincidente, y afirma que el proyecto restringe a los extranjeros que se encuentran legalmente en España, los derechos de reunión, manifestación, asociación y huelga, y es lógico que así sea —dice el Consejo de Estado— porque tales derechos positivos de libertad no pueden corresponder ni ejercerse por quien se coloca al margen de la propia legalidad.

Por lo que se refiere al requisito de la residencia legal para la titularidad y el ejercicio de los derechos, necesariamente me voy a remitir a la sentencia 104/1984 del Tribunal Constitucional que, a este respecto dice: la existencia de una legislación que exige el requisito administrativo de la autorización de residencia para reconocer al extranjero la capacidad de celebrar válidamente un acto jurídico, no se opone a la Constitución; la desigualdad resultante con relación a los españoles no es, en consecuencia, inconstitucional porque sencillamente en esta materia nada exige —repite, nada exige— que deba existir igualdad de trato. Por lo tanto, la residencia —también caballo de batalla y objeto de enmiendas, unido al ejercicio de los derechos sociales— es también un derecho de configuración legal, y eso es lo que hace este proyecto.

Espero haber despejado o solventado las incertidumbres del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posible inconstitucionalidad, y desde ahora mismo le animo, Senador Belloch, que retire el veto presentado. Espero que su

señoría no tenga ninguna cautela porque yo no voy a hablar aquí de que el PP esté cumpliendo un compromiso electoral, pero sí le manifiesto que estoy completamente de acuerdo con su afirmación de que las políticas de inmigración deben ser políticas de Estado y tenemos la oportunidad de evitar un problema muy serio, de aquí a una década, a este país.

Asimismo, tengo que decirle que deseamos llegar a un acuerdo tanto como ustedes y, aunque es cierto que es muy difícil, no es imposible. Como es su primer año de estancia aquí, permítame que le diga que esta Cámara ha hecho cosas más difíciles; por lo tanto, espero que ninguno perdamos la esperanza. Naturalmente, se estudiarán las posibles transaccionales que su señoría ha presentado.

Además, en primer lugar, quiero manifestar que este proyecto pone de relieve la prioridad que el Gobierno concede a la política de inmigración, que trasciende a una mera gestión de flujos migratorios para convertirse —o querer convertirse— en una política clave y esencial desde una perspectiva internacional y en el seno de la Unión Europea.

En segundo lugar, quiero decir que los objetivos que persigue este proyecto son tres: la integración y la convivencia en España de todos los extranjeros que residen en nuestro territorio, ordenar —desde la legalidad— los flujos de la inmigración y, por supuesto, dotarse de instrumentos más eficaces en la lucha contra las mafias y contra los que trafican con seres humanos. ¿Para qué? Para evitar abusos hacia los extranjeros, para que los extranjeros que quieran trabajar en España lo hagan con todas las garantías y derechos que les corresponden como trabajadores, en idénticas condiciones que los españoles, para evitar que los extranjeros realicen actividades laborales clandestinas y para asegurar que los extranjeros residentes en España tengan los mismos derechos que los europeos.

Sinceramente, creemos que la inmigración irregular no se detiene facilitando al máximo el paso de ésta a la legal sino potenciando los mecanismos que faciliten la inmigración legal desde el origen.

Insisto en que vamos a intentar llegar a un acuerdo porque será muy beneficioso, no para un partido ni para otro, sino para este país.

En cualquier caso, si el Senador Belloch no retira el veto, lo votaremos en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.

Abrimos el turno de portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Me voy a dirigir especialmente a la señora Vindel, ya que me ha sorprendido enormemente el hecho de que dé fe de lo que es un veto y lo que no lo es. Es cierto que soy el único Senador de Izquierda Unida dentro del Grupo Parlamentario Mixto, tengo que estar atento a todas las cuestio-

nes y, lógicamente, es posible que me equivoque a la hora de remitir un texto al Gobierno y no al Congreso, porque el texto de que dispongo —y en el cual he basado mi intervención— efectivamente corresponde al texto presentado por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Así es, y además ya me conoce lo suficiente para saber que procuro hacerlo lo mejor posible pero, en cualquier caso, este veto es un veto porque se está discutiendo aquí, y en el Pleno lo volveremos a discutir. Por tanto, usted no tiene por qué decidir si es un veto o no es un veto, puede contestarme o no, pero no calificar si es un veto o no lo es porque me parece una auténtica pasada —que yo también se la devuelvo—, y perdone la expresión.

Estoy en contra de las políticas «resistencialistas», pero estoy a favor de las políticas de resistencia cuando se defienden valores y derechos innegables e inmutables que, al menos, tengo a bien defender como miembro de la izquierda de este país. En consecuencia, si considera que estoy en vía muerta defendiendo esos derechos, ¡estupendo!, y el símil que he planteado le sirve a usted o me puede servir a mí, porque en la dialéctica política sirve todo.

En cualquier caso, usted no puede negar en absoluto que, en su momento, la ley que se quiere modificar era una ley de consenso entre todos los grupos políticos y, hasta tal punto era así, que hay miembros de su partido que coinciden en algunas cosas con nosotros. Fíjese lo que son las coincidencias, la versatilidad y la penetración de las ideas en gentes que son muy distintas ideológicamente, que incluso hicieron declaraciones públicas, en su momento, en contra del actual proyecto de ley que pretende reformar la ley 4/2000.

En definitiva, nuestro punto de partida es que había una ley de consenso, y usted no puede negarlo, como tampoco puede negar que no han dejado que se aplique esta ley, la ley actual. No ha habido posibilidad de aplicarla y de constatar si sus efectos son positivos o negativos. Ni tan siquiera hay un reglamento; simple y llanamente habla una posición de una parte de su partido, y del Gobierno de este país, según la cual se planteó su modificación, independientemente de los efectos que tuviese. Lógicamente, como consecuencia de diferentes hechos puntuales, perfectamente situados a nivel mediático, ha habido una alarma social con la que se ha querido justificar lo injustificable porque —al menos que yo conozca—, es la primera vez que no se deja que se aplique una ley de esta magnitud ni se constata que sus efectos sean o no perniciosos.

Permítanme que me dirija brevemente a mis compañeros del Partido Socialista para decirles que, desde mi punto de vista, han presentado un veto suave. Es un veto lógico para forzar la negociación entre los dos partidos, que hasta ahora no ha sido posible, porque —permítanme la jactancia—, con nosotros está la inmensa mayoría del movimiento social, de los sindicatos y de las asociaciones de inmigrantes, que opinan como nosotros, y aquí hay documentación sobrada que lo demuestra. Lógicamente, para una formación política de izquierdas, como es el Partido Socialista, es muy duro negociar todo con el Partido Popular y por eso digo que el veto es suave. En cualquier caso,

espero que no lo retiren, al menos para que existan vínculos en la izquierda que permitan defender valores y conceptos que, en mi opinión, es esencial defender en este momento.

También tengo que decir que la reciprocidad es una opción, pero podemos estar hablando de inmigrantes de países donde los derechos, las libertades, etcétera, brillan por su ausencia y vienen a un primer mundo en el que se presume de tantas cosas. Por tanto, mi opinión política es que el hecho de vincular este tema al de la reciprocidad es una auténtica barbaridad, y el colmo de los colmos es hablar de los abusos de los inmigrantes, como ha hecho la señora Vindel en la última parte de su intervención. ¡Esto es increíble! Hay que evitar que los emigrantes trabajen ilegalmente; hay que evitar la contratación ilegal de emigrantes por parte de muchos patronos, aprovechándose de su situación, con unos precios salariales bastante más bajos, con jornadas interminables; esos abusos están ahí, y me hubiese gustado escuchar fundamentalmente cómo este país, con sus leyes, puede garantizar que las personas que vengán a trabajar aquí obtengan todos los derechos, y primero los laborales.

Termino diciéndole que no me podrá negar que en el veto que planteamos hay algunas cuestiones interesantes, porque vincular el ejercicio de derechos fundamentales, como los derechos de asociación, manifestación, reunión, etcétera, a la situación de regularidad documental del extranjero en España es a todas luces, en nuestra opinión, inconstitucional. Ya lo veremos en su momento. Además, en este veto se plantea también la vulneración de convenios, pactos y tratados internacionales. Es nuestro punto de vista y tenemos todo el derecho de manifestarlo. Mucha gente coincide con nosotros, no estamos solos. Aunque aquí esté solo, en la calle no lo estoy. Por tanto, me siento bastante arropado en esta cuestión.

Quiero hacer especial mención a que el hecho de restringir los derechos de sindicación y huelga, especialmente, sólo para extranjeros documentados vulnera, al igual que lo he expresado anteriormente, la Constitución Española, los convenios de la OIT, etcétera, es decir, se producen auténticas barbaridades. Negar determinadas garantías jurídicas básicas, como la restricción del derecho a la asistencia jurídica gratuita es, en nuestra opinión, una vuelta a la discrecionalidad de la Ley del año 1985; y derechos que afectan a la esfera íntima del extranjero, como es la reagrupación familiar, tienen sus cortapisas y modificaciones.

Señora Vindel, no me podrá negar que tanto en el veto como en las enmiendas que nosotros presentamos existen, punto por punto en la inmensa mayoría de los casos, elementos concretos de modificación del proyecto de ley que ahora presentan, que reforma la Ley Orgánica 4/2000. Ésta es la realidad y, por ello, el veto y las enmiendas son un compendio de la posición de Izquierda Unida, justa y necesaria desde un perfil de la izquierda, recogiendo las reivindicaciones del mundo social que coincide con nosotros en esos aspectos y ustedes desean echar abajo estas propuestas en base a la ley que en su momento se aprobó por consenso, que intentaron modificar en el Senado aunque

no fue posible, y que finalmente se aprobó tal como se tramitó en el Congreso.

Nada más, señor Presidente, sólo he querido contestar a la Senadora Vindel. Éste es un veto y, lógicamente, se votará como tal, tanto en la Comisión como en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cámara.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.

El señor RÍOS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve. Estamos discutiendo la reforma de una ley que lleva un año de vigencia, es una cuestión de Estado e implica que en aquel momento no hubo consenso suficiente. El Grupo de Coalición Canaria interpreta que esta reforma que se plantea en las Cortes Generales sirve para completar ese consenso roto a finales del año 1999.

En esa línea y en ese deseo, se ha comprobado que en el Congreso se han introducido muchas modificaciones, muchas enmiendas, ha habido por tanto una cierta y amplia predisposición hacia el consenso. Yo tengo esperanzas de lograrlo y, por tanto, no vamos a apoyar los vetos planteados hoy.

Muchas gracias señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea Bergara.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor Presidente.

Además de posicionarme sobre los vetos planteados, quiero aprovechar para hablar de nuestras enmiendas, y así me evitaría intervenir en el segundo turno, si el señor Presidente lo estima oportuno.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: En el desarrollo de esta ley tuvimos una serie de temores, uno de los cuales, a pesar de todo lo que se ha hablado acerca del consenso, es que nosotros quedamos excluidos del mismo. Hace poco lo comentaba el señor Belloch cuando dijo que cuantitativa y cualitativamente había que integrar a todos, a unos por unas razones y a otros por otras. Y nosotros, a pesar de esa exclusión, hemos intentando llegar con el ánimo de alcanzar el consenso y optamos por no presentar el veto; ésta era nuestra idea para eliminar trabas, conseguir generar confianza y caminar positivamente hacia la tramitación de esta ley.

Por tanto, nos acercábamos a este proyecto desde esa exclusión e, insisto, con una serie de temores, como la precipitación de su reforma —mi compañera en el Congreso de los Diputados lo denominaba contrarreforma, que no se debía haber producido nunca—, porque existía una falta de

evaluación, se producía una cierta inseguridad, etcétera. Nos encontrábamos también con la exclusión de un importante número de derechos fundamentales hacia los extranjeros y además con el amplio margen de discrecionalidad del que se dotaba a la Administración en ese comienzo.

En estos momentos, se han dado pasos en casi todos los puntos y hemos oído hablar también de la posibilidad del consenso. La reforma está ahí, nos guste o no, la tenemos sobre la Mesa, y, evidentemente, se ha avanzado en muchas cuestiones, pero aun así consideramos que sigue habiendo aspectos sin resolver que constituyen un obstáculo, como hemos reflejado en nuestras enmiendas, como es la cuestión de los derechos.

Nuestro acercamiento a esta ley —que, como decíamos, quizá no se debería haber reformado de esta manera— sigue siendo con el espíritu y el objetivo de la integración mediante el reconocimiento de los derechos. Y queremos seguir con ese espíritu, y no contemplarlo desde un punto de vista catastrofista y oscuro. Todo lo demás, queramos o no, es excluir, dividir y separar, lo que no facilita la integración, sino, la exclusión. Y esto sólo cabe desde el reconocimiento del otro como igual, lo que significa que pueda ser posible que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, lo que creemos va acorde con los consensos que se han ido produciendo en esta materia y, como decía el señor Merino en su intervención, que podamos llegar a lo que se plantea en Tampere sobre la posibilidad de que los ciudadanos de terceros países puedan obtener los mismos derechos que los de otros Estados. Si van a residir, a trabajar, a pagar sus impuestos, tienen que lograr desarrollar sus derechos y no sólo sus deberes. Reconocer su ciudadanía es para nosotros lo que podría entenderse como la plena integración, y ése debe ser nuestro objetivo a la hora de abordar esta ley, al que mal llegaremos si partimos por negar derechos a un colectivo de extranjeros. Siempre debemos pensar en evitar problemas, y hacer un planteamiento no sólo desde un punto de vista fundamentalmente jurídico y de técnica de ley, sino político ya que, guste o no, estas personas existen, están en nuestras calles y desgraciadamente, existirán, lo que no deja de ser más que un problema de organización y de convivencia, como decía la Senadora Vindel; es fundamentalmente un cambio de valores, transformaciones y, en definitiva, necesita una solución política, es una cuestión política.

Quienes defienden este proyecto de ley, tienen tendencia a fijarse más en la parte negativa de la inmigración que en la positiva y enriquecedora de este fenómeno, incluso de una manera egoísta. Esto no quiere decir que no se tenga que ordenar y regular, incluso siendo duro, si es preciso, con la gente que se aprovecha de este fenómeno, sino que hay que hacerlo de una manera abierta; no quiere decir que se haga unilateralmente, sino de una manera coordinada, porque el fenómeno lo sufre toda Europa, no sólo el Estado español, y esta ley ha de tener en cuenta esta perspectiva para que también se pueda defender en Europa y para Europa. Todo ello sin entrar —como se comentaba en el primer veto defendido— en la deuda y en la responsabilidad que tenemos con todos esos países.

Se ha dado, por tanto, una visión catastrofista, oscura, a veces mafiosa, de cierre de fronteras, etcétera, y creemos que eso no favorece al proyecto de ley ni es afrontar el fenómeno de manera integral, como se esperaba. No nos gustaría que este proyecto quedara así, sino que queremos que sea positivo, abierto, sin complejos con el que dirán en nuestro entorno, porque a ellos también les afecta, y si nos gusta ser pioneros y progresistas en muchas cuestiones no nos tiene que asustar serlo en este aspecto, como lo han sido las expectativas que se han generado en los distintos acuerdos y convenios.

Nuestros temores no se disipan del todo, pero creemos que ustedes los pueden disipar. Nosotros hemos hecho nuestra pequeña aportación, desde nuestras posibilidades hemos realizado un esfuerzo, y ahora les toca a ustedes.

En coherencia con la apuesta de consenso que hemos planteado y de eliminar todas las trabas posibles, nos vamos a abstener en la votación, pero eso no significa que estemos de acuerdo con el texto, el cual, tal como está, no podemos aceptar.

Centrándonos en nuestras enmiendas, vamos a insistir en los derechos de los inmigrantes tal como se planteaba en la Ley 4/2000. No acabamos de encontrar una justificación del cambio, creo que no es una cuestión exclusivamente jurídica sino que es más bien de voluntad política, ya que hay argumentos jurídicos suficientes para que se pueda contemplar, y ustedes lo creyeron así en la tramitación de la Ley 4/2000, donde se vio la generosidad del Estado español. Por tanto, salvo que una vez más el legislativo, su Grupo en este caso, haya tenido que ceder ante el Gobierno, no acabamos de encontrar justificaciones para que no se reconozcan, como se reconocía en la Ley 4/2000, los derechos de todos los extranjeros.

En cuanto a los argumentos jurídicos, yo me remitiría a mi compañera en el Congreso, que los ha expuesto mucho mejor que yo y, por tanto no voy a insistir en los mismos. Además el señor Belloch ha dado suficientes alternativas y posibilidades para ello. Yo creo que es una cuestión eminentemente política más que jurídica. Por ello hemos presentado tres enmiendas que insisten en que son derechos indisolublemente unidos a la dignidad y a la libertad de las personas, sea cual sea su situación administrativa.

Otras enmiendas que hemos planteado tratan de evitar la discrecionalidad que veíamos en el proyecto de ley e intentan que haya una mayor seguridad; algunas pretenden reforzar figuras como el ACNUR para que los refugiados o las personas que soliciten el derecho de asilo no tengan ningún tipo de inseguridad.

Respecto al consenso con las Comunidades Autónomas, hemos querido reforzar la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus competencias, en relación a lo que figura en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, porque cuando se elaboró la Constitución y el Estatuto este fenómeno no era el mismo que existe ahora. Es conveniente demostrar que hay policías que tienen un tratamiento integral y que seguramente van a tener que actuar, aunque luego tengamos que habilitar otros convenios o acuerdos.

Con estas enmiendas intentamos que se disipen algunas inquietudes que tenemos; pretendemos que este proyecto de ley sea positivo y abierto; que en él exista el máximo consenso; que, a pesar de la precipitación de su reforma, sea para bien; que la exclusión de los derechos de los extranjeros no sea la que en estos momentos se plantea, y que el margen de discrecionalidad quede superado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aurekoetxea.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Molas i Batllori.

El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo con brevedad para formular una sola idea general sobre la cuestión, y es que nosotros, con nuestras enmiendas parciales al articulado, intentamos contribuir a la posibilidad de avanzar en el proceso de acercamiento y de acuerdo que se ha desarrollado hasta la fecha.

Debe reconocerse que en algunas partes del proyecto de ley se ha avanzado sustancialmente en este acuerdo, pero debe reconocerse también que en otras partes no. Nosotros creemos que es fundamental que se llegue al acuerdo global sobre este proyecto, simplemente porque aborda un hecho muy importante en nuestra vida política, y previsiblemente la generación de problemática alrededor del mismo va a ser creciente, cuestión en la que creo que todos coincidimos.

Frente a esto, se ha expresado en esta Cámara de forma clara que una política de inmigración debe ser una política de Estado, y es conveniente que así sea, pero una política de Estado no puede estar separada de una ley que sea estable, y por tanto de Estado, y debe tener la suficiente garantía de que no va a ser modificada por opciones políticas futuras en un plazo razonable. Esto lleva a una necesidad objetiva, y es que se dé el segundo paso en la política de acercamiento y acuerdo que se ha llegado en el Congreso, y se culmine el camino, que el Senado realice en este caso una tarea positiva de modificación de las leyes y, por tanto, encuentre su sentido en la segunda lectura. La actitud de nuestro Grupo es hacer todo lo posible para facilitar este acuerdo, mantener la esperanza hasta el último segundo y esperar a que entre hoy y el último segundo aflore el sentido de Estado de todos para que podamos llegar a un texto que, sin veto, con incorporación de enmiendas, aquellas que, según decida la mayoría, permitan la aparición de unos artículos que, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, en cambio sí pueda estar de acuerdo con una ley global y ésta quede reforzada por el consentimiento básico entre mayoría y oposición.

Creo que éste es un tema suficientemente importante, no sólo desde el punto de vista político, como he dicho hasta ahora, sino también para encontrar el sentido que el Senado debe tener en la confección de las leyes: mejorar técnicamente y buscar puntos de acuerdo que hasta aquel momento no habían salido.

Con este espíritu, nosotros hoy votaremos a favor del veto, pero con ese espíritu también nosotros trabajaremos

para que no exista veto si hay acuerdo y para que el acuerdo sea posible tan pronto como llegue a realizarse pero, en todo caso, sin desfallecer hasta el último segundo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Molas.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, tiene la palabra el Senador Sesmió i Rius.

El señor SESMIÓ I RIUS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, el posicionamiento de mi Grupo va a ser en coherencia con lo que ha sido nuestra posición a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, ya no sólo de este proyecto de ley que pretende modificar la Ley 4/2000, sino también con la postura que mantuvimos cuando se debatió la ley que hoy se pretende modificar, poniéndonos siempre al servicio de lo que creemos que ha de ser una ley de consenso.

En ese sentido, en este momento procesal consideramos interesante destacar el esfuerzo y la generosidad que ha existido por parte de todos los grupos que hasta el presente han intentado llegar a ese consenso. Y no me duelen prendas en reconocerlo especialmente del Grupo Popular, porque nosotros somos un grupo de Gobierno, y sabemos que cuando se tiene la mayoría se necesitan más dosis de generosidad para llegar a acuerdos. Por tanto, el hecho, como ha expresado la Senadora Vindel, de que se haya alcanzado un acuerdo respecto de más de 50 artículos demuestra, insisto, el esfuerzo realizado por parte de todos, y sería una lástima que ese esfuerzo no culminara en el Senado, ya que precisamente por ser la Cámara de segunda lectura es el lugar más propicio para redondear la trayectoria de la reforma de esta ley.

Como se trata de un proyecto de ley que no encontramos plenamente satisfactorio, pero sí lo suficiente como para que en el Congreso nuestro voto fuera positivo en lo que a los apartados orgánicos se refiere, por coherencia, no vamos a apoyar los vetos; máxime si tenemos en cuenta que el veto socialista se fundamenta en las enmiendas que nosotros mantenemos vivas y con las que se pretende que en esta reforma se sigan contemplando los derechos de asociación, sindicación y reunión de los inmigrantes no legales. Por tanto, como seguimos manteniendo esa opinión, insisto en que a nuestro modesto entender sería incongruente que ahora apoyáramos el veto del Grupo Socialista.

Cuando llegue el momento de la defensa de las enmiendas, al ser éstas prácticamente las mismas que defendimos en el Congreso, seré muy breve. Sin embargo, en dicho trámite haré hincapié especialmente en una de ellas, la cual, no por el hecho de que haya sido presentada por parte de nuestro Grupo, sino por su contenido, creo que puede propiciar algo que queremos todos los grupos: entrar en la razón política de lo que es evidente, razonable y positivo para intentar aunar esfuerzos y criterios.

Como digo, me referiré a a las enmiendas en el momento procedimental oportuno, por lo que, para no alar-

garme más ahora, simplemente anuncio que no vamos a apoyar los vetos que se han presentado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sesmió.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Belloch Julbe.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, cada cosa tiene su tiempo, el tiempo político aún es más claro, y para los socialistas éste no es el momento de polemizar sino de pactar. Por tanto, ahora no voy a hacer otra cosa.

Conozco los esfuerzos que hasta estos momentos ha hecho la ponente doña Rosa Vindel, estoy seguro de que los va a seguir haciendo durante las próximas horas y los próximos días, y nada nos satisfaría más que eso se refrendara con la retirada del veto llegado el Pleno.

En cuanto a la intervención del señor Cámara, diré que espero que a la izquierda nos una algo más que un veto; estoy convencido de que tendremos muchos más puntos en común para trabajar juntos en el futuro. En todo caso, si me lo permite, le diré que éste no es un veto tibio, sino simplemente distinto del que ustedes han presentado. Por otro lado, debo dejar claro que a los socialistas no nos preocupa lo más mínimo —antes al contrario: consideramos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad política— intentar pactar con el Partido Popular en todos aquellos temas que sean política de Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel López.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, agradezco a todos los que han intervenido el contenido de su intervención y el tono empleado.

No puedo estar más de acuerdo con las afirmaciones del Senador Molas, ya que es fundamental que se llegue al acuerdo y que ésta sea una ley estable. En cualquier caso, creo que todas las leyes, se trate de la que se trate, al menos nacen con vocación de estabilidad. Y, ciertamente, ésta es una oportunidad para que esta Cámara, que se supone que además de Cámara de segunda lectura también es Cámara de enfriamiento, consiga en quince días enfriar y darle la vuelta a este proyecto tal como nos ha llegado del Congreso. Como muy bien decía el Senador Belloch, que también está haciendo sus esfuerzos, soy la primera que se pondrá a ello. No les quepa duda.

Por otro lado, no me gustaría que el Senador Cámara se enfadara con esta Senadora. Señoría, si la broma que he hecho respecto de la vía muerta le ha molestado, no tengo ningún inconveniente en retirar ese comentario. También le diré que desde el primer momento he subrayado la co-

herencia que usted ha mantenido para con su Grupo Parlamentario, haya utilizado el instrumento reglamentario que haya utilizado. Pero yo no establezco aquí las cosas, sino que las normas internas de la Casa, contenidas en el Reglamento, son las que definen las iniciativas. Su señoría se ha opuesto a algo que no existe, y es muy difícil utilizar un turno en contra oponiéndose a algo que ya no es tal, porque la situación ha variado de medio a medio. Por otra parte, los pactos internacionales a los que usted ha hecho mención ahí están, ciertamente, y está bien que se recuerden, pero déjeme que yo también le recuerde lo que significan el Tratado de Amsterdam, y los acuerdos de Schengen y Tampere, porque si hay que tener en cuenta los tratados y los pactos internacionales, éstos, también.

Por último, hay que decir que la realidad del fenómeno migratorio ha superado la previsión de la propia norma, y todo lo demás supone remontarse a la época de la Prehistoria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.

Terminados los turnos a favor, en contra, y de posicionamiento de los diferentes grupos, procede ahora la votación de los tres vetos, los cuales requieren la mayoría absoluta de la Comisión para que prosperen, como saben perfectamente.

Iniciamos la votación por el veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, defendido por el Senador Cámara.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 16; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a la votación del veto número 2, también del Grupo Parlamentario Mixto, firmado originariamente por el Senador Quintana y que ha sido dado por defendido por parte del Senador Cámara.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 16; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, defendido por el Senador Belloch. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en contra, 16; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

De acuerdo con lo establecido en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces al inicio de la Comisión, se procederá a la defensa consecutiva de las enmiendas por los distintos grupos parlamentarios y, posteriormente, al igual que ha ocurrido en el caso de los vetos, se abrirán turnos en contra y de portavoces.

En primer lugar, y para la defensa de las enmiendas números 1 a 61, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

Si su señoría me lo permite, también voy a defender las enmiendas números 62 y 63 —en las que realmente me voy a centrar—, que este Senador ha presentado en esta Cámara.

En cuanto a las enmiendas números 1 a 61, algunas de ellas son de supresión y se remiten a la Ley 4/2000, de 11 de enero, y otras son de modificación. Para no perder tiempo, y a la vista del debate que hemos mantenido, las doy por defendidas.

Paso ahora a referirme a las dos últimas enmiendas —las cuales, como he dicho, he presentado en esta Cámara—, que tratan de lo siguiente. En nuestra opinión, no tiene sentido que los extranjeros extracomunitarios, independientemente de su situación administrativa, que residen en municipios y pagan algunos de los impuestos españoles, no puedan disfrutar de las compensaciones existentes en materia de desplazamientos interinsulares, entre Ceuta y Melilla y la Península, o en los dos archipiélagos. Nos parece que los extranjeros residentes en estas Comunidades Autónomas, independientemente de su situación administrativa, han de poder disfrutar de los descuentos en concepto de viajes en las mismas condiciones que los españoles. Hay que recordar que estos colectivos tienen un muy bajo nivel de ingresos, tienen muchas dificultades; por ejemplo, en Baleares una familia numerosa que reside en esa Comunidad puede tener una situación, entre comillas, irregular —y permitan que les diga que hay que diferenciar lo irregular de lo ilegal—, porque le falte alguno de los requisitos, pero es una familia residente, ya que vive en un pueblo o en una ciudad, paga impuestos, etcétera. Por tanto, nos parece del todo acertado, bajo mi punto de vista, que pueda ser contemplada esta enmienda, muy parcial, pero que es de justicia.

Yo también pertenezco a una formación política, aunque minoritaria, que gobierna en Baleares, y, por cierto, la Consellería de Bienestar Social, a la que afecta la política de emigración, está dirigida, junto con otros grupos, por Izquierda Unida. Lo digo para contestar a una alusión que antes se ha hecho.

La siguiente enmienda trata sobre el mismo tema, o muy parecido. Consideramos que es discriminatorio que los trabajadores extracomunitarios, independientemente también de su situación administrativa, y aún más cuando en su inmensa mayoría se corresponden con sectores sociales con bajos ingresos, como decía antes, no puedan beneficiarse de descuentos y compensaciones por el concepto de familia numerosa. Están ligados los viajes y la familia numerosa, y, por tanto, también nos parece apropiada la enmienda número 63 que presentamos.

Como yo también deseo el máximo de acuerdos posibles, en beneficio de estas personas, lógicamente espero que alguna de las enmiendas —no todas— presentadas,

tanto de la número 1 a la 61, como estas dos últimas, sean tenidas en cuenta, y también se consensue con esta formación política, ya que últimamente no hay forma de consensuar nada; sólo lo hacen los dos partidos mayoritarios, y los demás vamos a remolque. Yo me niego a esta situación, y por tanto expreso aquí mi voluntad de consenso —esto está bastante de moda, es bastante efectivo y estoy de acuerdo con ello— para que la señora Vindel, portavoz del grupo mayoritario en este debate, tenga en cuenta algunas de las enmiendas; si no todas, al menos aquellas sobre las que otros compañeros han expresado su acuerdo, así como estas últimas, con el fin de que, sin estar de acuerdo con el conjunto de la ley, al menos nos podamos sentir mejor con la misma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cámara.

Se consideran entonces defendidas las enmiendas números 1 a 63, y también las números 64 a 91, del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, que había defendido ya, en su intervención previa correspondiente al veto.

Pasamos ahora a las enmiendas números 92 a 98, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Para su defensa tiene la palabra el Senador Ríos.

El señor RÍOS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero comenzar la defensa de estas seis enmiendas que tenemos presentadas haciendo algunas observaciones. En primer lugar, que esta segunda lectura en el Senado nos vuelve a coger con el pie cambiado, en cuanto a la urgencia, y esta segunda lectura es necesario hacerla despacio para poder conseguir algunos datos objetivos. Lamento que tengamos las prisas que tenemos porque habrá dificultades para conseguir el consenso completo, amplio y total que se exige para una cuestión de Estado, que no es un problema de Gobierno, que no es un problema de legislación, y que yo entiendo que es simplemente una ley incompleta —desde finales del año pasado hasta ahora—, desde el punto de vista del consenso colectivo, por lo que hay que intentar buscarlo.

Tengo que decir también que durante este año ha habido una atmósfera un poco enrarecida, porque se han utilizado datos incorrectos en relación con el concepto del efecto llamada de la ley anterior, cuestión en la que no es necesario profundizar, porque no ha sido cierta; basta ver los números y las realidades acaecidas. Ojalá esto no nos vuelva a ocurrir y seamos todos consciente de que es un tema de Estado.

De las seis enmiendas presentadas por Coalición Canaria hay dos, las números 92 y 93, que inciden en un tema que han tratado la mayoría de los grupos: que es necesario mantener el derecho de reunión y el de asociación, aunque sea de forma restringida; hay que ver de qué forma se puede conseguir un consenso en estos temas. Por ejemplo, en el derecho de reunión, que el promotor sea el residente, cuando ya sea estable, etcétera. En este aspecto hay que profundizar, repito.

Después está la reagrupación familiar. Si se prescinde del concepto humanitario, pueden crearse graves problemas, y valdría la pena profundizar también en ello, tanto para los emigrantes que vienen como para los familiares extranjeros de los residentes españoles, porque se producen circunstancias difíciles que estamos viviendo diariamente.

Las enmiendas número 95, 96 y 97 están vinculadas a todo el proceso de faltas, y a la correspondiente expulsión. Debo recordar aquí el principio general del Derecho «non bis in idem», es decir, que no se puede castigar dos veces por un mismo hecho, por lo que sería imprescindible la supresión de estas cuestiones.

La enmienda número 97 trata de asegurar de alguna forma a las personas que carecen de medios económicos la garantía plena de asistencia letrada e intérprete, en el caso de que no conozca nuestro idioma.

La enmienda número 98 sirve para completar un deseo que presentamos al final de la legislatura anterior, cuando se debatió por primera vez la ley, que era contemplar la situación especial que tiene Canarias con respecto a su ubicación geográfica y a los temas complementarios. No es posible conseguir una solución estable al problema sin que haya unas relaciones en profundidad culturales, de inversión y económicas con los países norafricanos, tanto los suprasaharianos como los subsaharianos. Por tanto, pretendemos que se cree una subcomisión en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, que además de los temas intrínsecos de emigración, pueda afrontar también todos los demás relacionados con los países vecinos próximos geográficamente, y además relacionarlo con la Unión Europea y su apoyo, porque al fin y al cabo somos la frontera más meridional de Europa con respecto a los países africanos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.

Pasamos a la defensa de las enmiendas números 99 a 121, del Grupo Parlamentario Socialista, de las cuales las números 99 a 108 fueron ya previamente defendidas por el Senador Belloch. Por tanto, para la defensa de las números 109 a 121, tiene la palabra el señor Saavedra Acevedo.

El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señor Presidente.

En estas enmiendas, unas se refieren al Título III, sanciones, faltas, procedimientos, y las otras se refieren a disposiciones diversas, que creo que tienen alguna importancia.

Un aspecto en el que queremos incidir es en la calificación de las faltas. Las infracciones son consideradas como leves, graves y muy graves, sin embargo, a la hora de aplicación de la sanción, hay una identificación, porque de las siete infracciones graves, cinco pueden ser asimiladas a las muy graves en la aplicación de la máxima sanción, que es la expulsión. En consecuencia, no tiene muy buena sistemática ni creo que responda a los criterios de proporcionalidad esto que aún se refleja en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, a pesar de haberse mejorado el texto inicialmente remitido por el Gobierno. El problema

está en que si las infracciones leves, graves y muy graves se sancionan con multas de cuantía variable, no es lógico, como les decía, que las infracciones graves y muy graves queden englobadas todas, con la posibilidad de la expulsión del extranjero.

Además, hay una cierta imprecisión, ya que estamos hablando en algunas infracciones de conductas que no son del trabajador extranjero sino del empresario, con lo cual, sin que se haga una referencia específica a la derogación de preceptos de la Ley 8/1988, donde se regulan las infracciones y sanciones del orden laboral, estamos introduciendo importantes tipificaciones de faltas empresariales que se corresponden con sanciones importantes. Por consiguiente, queremos matizar la aplicación de la sanción más dura, que es la de la expulsión, de manera proporcional a las conductas. Consideramos que sólo aquellas que son muy graves deben ser sancionadas con la expulsión.

En la enmienda número 111 queremos abrir una vía de regularización, que me parece importante, al permitir que se exima de responsabilidad administrativa, en definitiva, de ser considerada una infracción, para aquellos que hayan permanecido en España de forma continuada durante los dos últimos años anteriores a la incoación del expediente sancionador y acredite disponer de medios de vida, etcétera, se proponga realizar una actividad por cuenta propia o tenga una oferta de contrato de trabajo. Estimamos más justo abrir la posibilidad de regularizar la situación de este trabajador, que tiene una oferta de trabajo o tiene medios suficientes para vivir, que ser considerada como falta grave o muy grave, por su correspondiente asimilación.

La enmienda número 114 persigue que se reconozca el derecho a la asistencia de letrado y de intérprete en los supuestos que en la misma se recogen.

El artículo 53 del proyecto de ley, donde se regula el procedimiento del retorno, dice: Artículo 60.1: «Los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de origen en el plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno fuese a retrasarse más de 72 horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta que llegue el momento del retorno.» Sin embargo, no se dice nada sobre el derecho de este extranjero de contar con la asistencia letrada y de intérprete en los supuestos en que no tenga que retrasarse más de 72 horas.

En las enmiendas números 115 y 116 se introducen algunas matizaciones que estimo podrían llevar al Grupo Parlamentario Popular a transaccionar alguno de sus apartados.

Paso a referirme al Título IV, en relación con el Foro de la Inmigración.

En la enmienda 118 recogemos algo a lo que no ha sido sensible el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno. Proponemos que el Foro de la Inmigración sea el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de inmigración, y esté compuesto, entre otros, por representantes de las administraciones públicas. Si no se modifica el texto, quedaría como órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes. Estamos ante un supuesto en el se supone que los re-

presentantes de las administraciones públicas van a ser las Comunidades Autónomas. El Grupo Parlamentario Popular parece olvidar que la mayor parte de las competencias de integración social, por no decir la totalidad, corresponde a las Comunidades Autónomas y éstas ¿para qué van a acudir a un foro donde sólo se va a hablar de integración social? Podrían alegar que no tienen el menor interés, pues ya tienen su propio foro en el ámbito de la Comunidad, como sucede en el caso de Andalucía, en Canarias y en algunas otras que ya lo han ido creando porque tienen competencias en integración social. Por ello, nuestra enmienda quiere abrirlo a la inmigración, sin limitarlo a ese aspecto que podría llevar a que la Comunidad se desinterese de acudir a ese foro por no considerarlo de utilidad dado que tienen el propio, e incluso que se piense que es una colisión con competencias de cada Comunidad.

En las disposiciones adicionales proponemos una autorización al Gobierno para que proceda a enviar un proyecto de modificación de la Ley de Régimen Local en coherencia con el texto previsto en el artículo 6.2 de esta ley. Es una enmienda de adición absolutamente razonable y podría ser asumida por el Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a las otras enmiendas de adición relativas a la regulación de centros de internamiento para extranjeros, es otro mandato que otorgamos al Gobierno para que, por vía reglamentaria o legal, como estime oportuno —requerirá ley orgánica— regule estos centros que ya existen en nuestro país, que no son muchos, pero que llevan funcionando bastantes años, careciendo de todo tipo de regulación, manteniéndose en una especie de terreno de nadie, planteando problemas de tipo humanitario y de respeto de derechos para los que se encuentren en situación de internados.

Finalmente, hay una propuesta de modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado. Valoramos la posibilidad de que el Estado español haga uso de la cláusula de soberanía en los supuestos en que el solicitante del asilo tenga vínculos familiares sólidos en España y que no sea reenviado a otro país donde no tenga ningún tipo de vínculos de tal naturaleza. Se podría perfeccionar esa ley que está tan vinculada a ésta que estamos analizando.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Saavedra.

Las enmiendas números 122 a 128, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, fueron defendidas en su momento por el Senador Aurrekoetxea en el turno de portavoces, con los tres vetos que previamente se debatieron.

Por lo tanto, las damos por defendidas y pasamos a las enmiendas números 129 a 163, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Molas.

El señor MOLAS I BATLLORI: Señor Presidente, doy por defendidas mis enmiendas en virtud de la intervención que hice en el debate sobre el veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mo-las.

En este caso, pasamos al último grupo de enmiendas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 164 a 180.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Sesmilo.

El señor SESMILO I RIUS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, de las dieciséis enmiendas que nuestro Grupo ha presentado, quince son casi copia literal de las que presentamos en el Congreso y no fueron aceptadas. No obstante, conservamos el optimismo en relación a todas aquellas que hacen referencia a los derechos de los inmigrantes no legalizados, en las que coincidimos con los otros grupos. Como se ha mencionado el consenso —y es difícil llevarlo a cabo si el Grupo Parlamentario Popular se queda solo—, esperamos que el optimismo sustituya a este especie de escepticismo, observando el afán del Grupo Parlamentario Popular de presentar enmiendas.

Quisiera solamente referirme a una, que voy a leer, por ser una enmienda nueva, de modificación, que presentamos en el Senado. Dice: «Disposición Transitoria Cuarta, El Gobierno, mediante Real-Decreto establecerá los requisitos que permitan, sin necesidad de presentar nueva documentación o presentando la que en el mismo se determine —eso es lo que hemos añadido—, la regulación de los extranjeros que se encuentren en España y que habiendo presentado solicitud de regulación al amparo de lo previsto en el Real-Decreto 239/2000, de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma.» Insisto: es el mismo texto; simplemente se añade «o presentando la que en el mismo se determine». ¿Por qué? Porque el añadido sí que modifica totalmente lo que viene del Congreso. Y continúa un segundo párrafo: «Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellos extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 31 de julio de 2000, siempre que acrediten una situación de arraigo.»

Es decir, pretendemos que se amplíe a aquellos a los que les ha sido denegada. En el texto del Congreso se establecen los requisitos para los que hayan entrado justo antes del 1 de junio de 1999, y nosotros pretendemos que se alargue un año más y, además, que se constate la situación de arraigo. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos encontrado con que muchas de estas organizaciones no gubernamentales —a las que precisamente porque se cuidan de los derechos de los inmigrantes les presuponemos toda la buena fe posible—, al aconsejar a estos inmigrantes, no lograron que fuera resuelta favorablemente la parte burocrática. Como ya se dice en la disposición transitoria cuarta, que mantenemos (es decir, habiendo sido denegada la misma por los defectos de forma), ahora pedimos que no pierdan este año y que puedan regularizar su situación mediante la documentación nueva que decida el Gobierno cuando promulgue el correspondiente real decreto.

Es una enmienda sobre la que tenemos la certeza moral, a riesgo de equivocarnos, de que todos estamos de acuerdo. Estoy convencido de esto. Sería fantástico que ahora mismo dijeran que sí, que se está de acuerdo y que ya se incluyera en el dictamen. Como el consenso que se

pretende es muy amplio, y esperamos que positivo, estoy convencido de la receptividad de todo el mundo y de que, al menos en el Pleno —o sea, que no me hago ilusiones respecto a este momento de la tramitación, pero sí en cuanto a la sesión plenaria—, las enmiendas, que por obvias y porque responden a lo que todos hemos defendido, es decir, la situación de legalidad en el mayor número de los casos previstos de los extranjeros en España, corran la suerte que se merecen, que es la de ser aprobadas.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sesmilo.

Pasamos al turno en contra, que se entiende que lo será para todas las enmiendas defendidas.

Tiene la palabra la Senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor Presidente, a efectos aclaratorios, al igual que el Grupo Parlamentario Socialista, nos hemos dividido el trabajo, por lo que intervendremos la Senadora Bonilla y yo en el turno en contra. Comienzo yo.

Me voy a referir a todas aquellas enmiendas que se han presentado dentro del artículo primero, a los artículos del 1 al 25, así como a los artículos 52 al 66. Déjenme informarles de que, en total, hay 180 enmiendas. Este grupo de artículos han recibido 91 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Senadores Cámara y Cabrero; 16 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Senador Quintana; tres enmiendas del Grupo de Coalición Canaria; seis enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; 17 enmiendas del grupo Entesa Catalana de Progrés; cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y seis enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En total, 63 enmiendas.

Evidentemente hay una enmienda que pretende la supresión, en su totalidad, del artículo primero. Está presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Senadores Cámara y Cabrero. Como es lógico, nos vamos a oponer a ella porque su aceptación iría en contra del fin mismo de la reforma.

El artículo 3, que contempla los derechos de los extranjeros, registra tres enmiendas, una de modificación, del Grupo Parlamentario Socialista; una, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y otra, de modificación, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En idéntico sentido, el artículo 5.2, libertad de circulación, registra una enmienda de supresión del mismo y una enmienda de modificación, también del Grupo Parlamentario Mixto.

El artículo 6, sobre la participación pública, tiene una enmienda, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto; otra, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto; otra, de modificación, del Grupo Parlamentario Socialista, y dos enmiendas, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 7, que trata de las libertades de reunión y manifestación, tiene seis enmiendas de supresión propues-

tas por los distintos grupos; una, de modificación, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y una, de sustitución, de Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 8, sobre la libertad de asociación, tiene una enmienda, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto; una enmienda, de modificación, del Grupo Canario; una enmienda, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto; otra del Grupo Parlamentario Socialista; otra, de modificación, del Grupo Parlamentario Socialista; una, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y una, de supresión, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El artículo 9, derecho a la educación, tiene 2 enmiendas de supresión, ambas del Grupo Parlamentario Mixto, y dos enmiendas de modificación, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El artículo 10, derecho al trabajo y a la Seguridad Social, registra una enmienda, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto; una enmienda, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto; dos enmiendas más, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto, y una, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 11, libertad de sindicación y huelga, registra cuatro enmiendas de supresión procedentes, dos de ellas, del Grupo Parlamentario Mixto; otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; otra del Grupo Parlamentario Socialista, y, por último, una, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 13, relativo a las ayudas en materia de viviendas, registra dos enmiendas, una de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés y otra, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto.

El artículo 15, sobre la sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles, según mis datos, no registra ninguna enmienda.

El artículo 16, derecho a la intimidad familiar, registra dos enmiendas, una de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto y otra, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 17, que se refiere a las familias reagrupables, presenta dos enmiendas de supresión, una de ellas del Grupo Parlamentario Mixto y otra del Grupo de Coalición Canaria; una, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto, y una, de adición, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 18, procedimiento para la reagrupación, presenta una enmienda de supresión, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y otra, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto.

El artículo 19, efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales, registra dos enmiendas, una, de modificación, del Grupo Parlamentario Mixto y otra, de supresión, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 20, que trata del derecho a la tutela judicial efectiva, presenta una enmienda, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto; una, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana, y una, de supresión —no toda ella, sino en parte—, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El artículo 21, derecho al recurso contra los actos administrativos, registra dos enmiendas de modificación, una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y otra del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

El artículo 22, derecho a la asistencia jurídica gratuita, tiene dos enmiendas, una, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto y otra, de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

Por último, el artículo 25, requisitos para la entrada en territorio español, registra dos enmiendas: una, de supresión, del Grupo Parlamentario Mixto y otra, que todavía no he conseguido adivinar si es de supresión o de sustitución, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.

Señorías, en este primer grupo de artículos, del 1 al 25, querría hacer unas consideraciones generales.

Antes, durante la tramitación de los vetos, ya he dicho que, durante la vigencia de la Ley 4/2000, se detectaron aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio superó las previsiones de la norma. En primer lugar, esta reforma parte de que, no sólo en la actualidad sino con vistas a los años venideros, la inmigración ha de regularse desde la consideración de ésta como un hecho estructural que ha convertido a nuestro país en un destino de los flujos migratorios y en un punto de tránsito hacia otros Estados, cuyos controles fronterizos a las rutas desde el nuestro han sido eliminados o reducidos sustancialmente.

Además, este proyecto forma parte de un planteamiento global y coordinado en el tratamiento del fenómeno migratorio en España, y lo contempla, por lo tanto, no sólo desde una única perspectiva, como pueden ser el control de los flujos, la integración de los residentes extranjeros o el co-desarrollo de los países de origen, sino desde todos ellos conjuntamente.

Permítanme recordarles que en Tampere se acordó que se debía garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residieran legalmente en el territorio de sus Estados miembros. Pues bien, una política de integración debe conceder —al menos desde nuestro punto de vista— a estos residentes derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea y contribuir a fomentar la ausencia de discriminación en la vida social, económica y cultural y al desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia.

Los primeros 25 artículos del proyecto que estamos examinando se preocupan en reconocer a los extranjeros la máxima cota de derechos y libertades y así, como criterio general, éstos ejercerán los derechos que les reconoce el proyecto, en condiciones de igualdad con los españoles.

Además de ser más garantista en cuanto a derechos respecto a la Ley 4/2000, permítanme recordarles que en las enmiendas que se aceptaron en el Congreso de los Diputados en cuanto a derechos se incluyó la reagrupación familiar, la asistencia jurídica, la libertad de circulación, el sufragio, sindicación y huelga, educación, garantías procedimentales, endurecimiento de penas para traficantes y pateristas, se tiene en cuenta el contingente de mano de obra para trabajadores no residentes, se fija el número de la oferta de empleo, la posibilidad de regularización de

aquellos que presentaron la documentación y no están todavía en situación legal, mejora los requisitos de entrada en el territorio, el tratamiento de visados, el de la residencia temporal, el derecho a la educación básica y la posibilidad de constituir subcomisiones en las comisiones bilaterales Estado-Comunidades Autónomas para analizar cuestiones acordes con las necesidades de éstas. También se incluyeron en el trámite del Congreso de los Diputados derechos a ayudas para el acceso a la vivienda.

El proyecto distingue la situación de los extranjeros que se encuentran legalmente en España, respecto de aquellos que no tienen residencia legal, lo que la Ley actual no hace, dificultando claramente la aplicación de los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé para controlar los flujos migratorios y, sobre todo, para asegurar la legalidad de entrada y permanencia de los extranjeros en territorio español.

Dicho esto, lo verdaderamente importante, señor Presidente, es que el cumplimiento de los derechos del proyecto sea una realidad efectiva, es decir, que el enunciado de un derecho se corresponda con la realidad de su ejercicio.

Por tanto, no aceptamos —como ya he dicho— la supresión del artículo 1º porque iría en contra de la esencia de la propia reforma que se pretende, ni aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las modificaciones propuestas en aquello que se refiere a la libertad de circulación porque, por razones de seguridad pública, el Ministerio del Interior puede adoptar medidas limitativas, por lo creemos que es necesario señalarlo explícitamente y, mucho más, en esta Ley.

Señorías —lo entenderán perfectamente—, doy por reproducidos todos los argumentos que di en el momento de oponerme a los vetos en aquello que se refiere a los derechos de configuración legal, los sociales, de reunión, manifestación, asociación, libertad de sindicación y huelga.

El derecho de educación básica y gratuita se reconoce para todos los extranjeros menores de 18 años, la no obligatoria a los mayores o menores residentes, el acceso como personal funcionario de los extranjeros —es una de las enmiendas que se ha planteado— entendemos que es contraria a la Constitución. El proyecto no limita —como entienden algunas enmiendas— el derecho de reagrupación, sino que lo reconoce para todos los extranjeros residentes, y por lo que se refiere al procedimiento para la reagrupación familiar, todo el artículo es nuevo y debe depender en un principio del reagrupante, en tanto que los familiares van a depender de éste, si bien también se contempla que puedan tener un permiso independiente en determinadas circunstancias.

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, ni se limita en el artículo 20, como sostienen gran parte de las enmiendas, ni la representación de las organizaciones no gubernamentales. En este sentido, señorías, les remito al apartado tercero del mencionado artículo.

Por lo que se refiere al artículo 22, extranjeros en España sin recursos económicos, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, además de intérprete, en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a su denegación de entrada, a su devolución e, incluso, su expul-

sión y procedimientos en materia de asilo. Esto se aplica a todos los extranjeros que se encuentren en España y me parece muy importante recalcarlo.

Por lo que se refiere a los extranjeros residentes que carezcan de recursos, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en idénticas condiciones que los españoles en aquellos procesos judiciales en que sean parte cualquiera que sea la jurisdicción en la que estén implicados.

La pretensión de que las organizaciones no gubernamentales estén presentes en las zonas internacionales de los aeropuertos con carácter general no nos parece muy procedente, señorías. Creemos que el texto vigente mejora los actos que constituyen discriminación y les remito, para no alargarme, a la lectura del artículo 23.

En cuanto al artículo 25, los requisitos para la entrada en territorio español, propuesto por el Bloque Nacionalista Galego, nos oponemos frontalmente a ello, entre otras cosas porque los términos de dicho artículo, tal y como ha venido redactado, son los establecidos en el artículo 5 del Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen.

Por último, en cuanto a la participación en asuntos públicos, hay dos enmiendas, de Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a reflexionar junto con la de los derechos sociales, pero, sinceramente, tengo que decirles que creo que se produce una confusión no deseada con respecto a la figura de la representación, sobre todo cuando entendemos que los extranjeros residentes están empadronados y, por tanto, tienen todos los derechos establecidos por la Ley.

Señor Presidente, he terminado de forma muy resumida con mi turno en contra de las enmiendas presentadas. De su señoría depende que yo continúe utilizando el turno en contra. Si prefieren, puede intervenir ahora la Senadora Bonilla, para luego volver a intervenir yo para hablar sobre las infracciones y las sanciones. Estoy a su disposición.

El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Senadora Vindel. Tiene la palabra la Senadora Bonilla.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a continuar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, con el turno en contra de las enmiendas presentadas y defendidas en esta Comisión por los diversos grupos.

Completando las manifestaciones de mi compañera, la Senadora Vindel, quiero decir que desde nuestro punto de vista en este bloque de enmiendas al Título II, sobre el régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros, el objetivo que ha seguido el Grupo Parlamentario Popular ha sido el de llegar a establecer un régimen de situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a entrar y residir en nuestro país dentro del marco de la regularidad, frente a la entrada y estancia irregular. Es importante recordarlo porque es la pauta constante de esta reforma del proyecto de ley. Tampoco podemos olvidar que la normativa se debe de ajustar al Convenio de Schengen ya que España forma parte del mismo. Nuestro objetivo ha de ser facili-

tar que el extranjero que desee trabajar en nuestro país lo pueda hacer con todas las garantías y con todos los derechos. Es importante destacar, como comienzo y como base, que la política migratoria siempre debe basarse en una canalización de los flujos migratorios y nunca debemos ordenar esa política sobre situaciones o hechos irregulares.

Dentro del Capítulo I, referido a la entrada y salida del territorio, tengo que destacar la importancia del visado, como instrumento de política general y migratoria en particular. Por ello, es importante destacar que el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de los visados se sujetará a los compromisos internacionales y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como lo son la de inmigración, la económica y la seguridad ciudadana.

Es importante resaltar que la entrada de los extranjeros, el régimen de expedición de visados, la estancia, la prórroga de la misma, se han adecuado en la nueva norma a lo establecido en el Convenio de Schengen. La novedad en este sentido es la posibilidad de concesión de un permiso de residencia temporal por razones humanitarias o circunstancias excepcionales.

Entendemos que respecto de los visados es importante que la motivación de su denegación vaya fundamentalmente a las situaciones de trabajo por cuenta propia y de reagrupación familiar. Así se garantiza el que una persona que quiera venir a residir a nuestro país sepa por qué se le ha denegado el visado, pero aceptar una motivación en la denegación de visados a todos los supuestos nos parece que no es ordenado dentro de nuestra legislación.

Quiero decir al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que su enmienda número 170 ha de ser rechazada, remarcando que la remisión no lo es en blanco, sino a una norma con rango de ley.

Respecto a la enmienda número 105, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, quiero destacar, por un lado, que no tendría sentido suprimir el artículo 28, ya que sería contrario al Convenio de Schengen. Por otro lado, sería del todo innecesario y es técnicamente mejor lo expuesto y propuesto en nuestro proyecto.

El Capítulo II, referido a la situación de los extranjeros, es muy importante, por cuanto entendemos que el artículo 29.3 de la Ley actualmente vigente, exige requisitos poco estrictos. Es una salida permanente para la situación de ilegalidad, lo que, en la práctica, significa una llamada para los extranjeros que permanecen en una situación ilegal durante el período establecido de dos años que, unido a la limitación de facultades de expulsión de extranjeros en situación ilegal, impide el establecimiento de una política migratoria asentada sobre la canalización de los flujos migratorios.

Por ello debemos rechazar las enmiendas presentadas en este sentido y quiero citar la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Mixto, destacando que la modificación que se propone para el artículo 29, apartados tres y cinco, supone una clara vía de atracción de inmigración irregular. Es, entendemos, más coherente con las situacio-

nes de los extranjeros y con el establecimiento de procedimientos reglados la redacción del proyecto de reforma.

Respecto a la enmienda número 126, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al artículo 31, no se acepta por cuanto la concesión de este tipo de permiso de residencia está condicionado a la acreditación y cumplimiento de los requisitos que se especifiquen reglamentariamente, por lo que no es una concesión automática del tenor del apartado cuarto del artículo 31.

En cuanto a las enmiendas presentadas al artículo 32, entendemos que han de ser rechazadas y las rechazamos. La número 25, de Izquierda Unida, por cuanto no tiene ningún sentido la supresión del apartado segundo del artículo 32 sobre la residencia permanente que, por otra parte, supone una clara mejora respecto a la redacción de la Ley Orgánica 4/2000.

Igualmente ha de ser rechazada la enmienda número 107, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por cuanto entendemos que es más coherente con la finalidad y esencia del permiso de residencia permanente, remitiéndose la regulación de las excepciones y la exigencia de ese período continuo a que sea desarrollado reglamentariamente.

Respecto a las enmiendas números 62 y 63, entendemos que son contrarias a los planteamientos básicos de este proyecto.

En cuanto a las enmiendas presentadas al artículo 35 por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo Parlamentario Mixto, consideramos más coherente el texto del proyecto, y técnicamente aporta mayor seguridad.

Por lo que se refiere al Capítulo III, es de destacar que las enmiendas presentadas a los artículos 36 al 43 del proyecto, han de ser rechazadas por cuanto muchas suprimen el permiso de trabajo como un documento necesario para que los extranjeros puedan trabajar en España.

Igualmente destacamos, sobre todo respecto de la enmienda número 33, presentada por Izquierda Unida, que es muy conveniente el mantenimiento de la regulación del régimen especial de trabajadores de temporada.

Respecto a las enmiendas números 31, de Izquierda Unida; 162, de Entesa; 82, del Bloque Nacionalista Gallego, y 173, de Convergència i Unió, destacamos que el texto del proyecto de reforma sobre el establecimiento de contingentes contempla mayor número de circunstancias y de actores necesarios para la adopción adecuada de esa decisión y procedimiento. La supresión propuesta en esta enmienda es contraria a la propia definición de contingente de trabajadores extranjeros.

Respecto al Capítulo IV, en cuanto a las tasas, las enmiendas presentadas a los artículos 44 al 49 han de ser rechazadas, sobre todo las números 35 a 40, presentadas por Izquierda Unida. Se debe regular el hecho imponible de las tasas por la concesión de autorizaciones administrativas, expedición de documentos de identidad previstos en la Ley, así como prórrogas, modificaciones y renovaciones de los diferentes documentos que se regulan. Por seguridad jurídica debe quedar establecido el momento del devengo, la definición de sujeto pasivo y establecerse los cri-

terios de cuantificación de tasas. Se considera muy justo el establecimiento de supuestos de exención de la obligación del pago de tasas en los casos de especial vinculación con España.

Respecto a la enmienda número 174, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, no se puede aceptar por no ser competencia de las Comunidades Autónomas.

El Título IV, referido a la coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración, es, a nuestro juicio, de gran trascendencia, destacando que se mantienen los mecanismos de la Ley Orgánica 4/2000. Se prevé la constitución del Consejo Superior de Política de Inmigración, que estará integrado por representantes de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y de los municipios. El objetivo de ese Consejo era establecer las bases y criterios sobre los que se asentará una política global en materia de integración social y laboral de los inmigrantes.

Respecto a la coordinación de los órganos de la Administración del Estado, se hace una especial referencia a las oficinas provinciales de extranjeros.

Por lo que se refiere al foro para la integración social de los inmigrantes, se ha revisado su función como órgano de consulta, información y asesoramiento sobre la integración de los inmigrantes que se encuentran en España, que es uno de los principales objetivos de esta ley.

Respecto a las enmiendas presentadas a este articulado, las rechazamos sobre la base de lo expuesto, destacando que la número 155, presentada por el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, no se acepta toda vez que se regulan en el mismo texto otros foros en los que sí concurren las diferentes administraciones públicas. Igualmente no pueden ser aceptadas la número 53, presentada por Izquierda Unida, y la número 118, por entender que el foro es un órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración, por lo que no se puede aceptar que se pretendan ampliar sus funciones a cualquier aspecto en materia de inmigración; entrada, documentación, etcétera.

Con respecto a las disposiciones adicionales, hemos de rechazar todas las enmiendas, resaltando que la número 119, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha de ser rechazada por cuanto es más coherente con la normativa del régimen local lo contemplado en el texto del proyecto.

Respecto a la enmienda número 120, presentada por el mismo Grupo, no se puede aceptar por considerarse que la regulación orgánica y funcional de los centros de internamiento, que no tienen carácter penitenciario, no son materia de ley orgánica.

Las enmiendas números 54, 55 y 56, presentadas por Izquierda Unida, no se pueden aceptar por cuanto la introducción de una nueva disposición adicional supone una mejora respecto al texto de ésta y, por otro lado, no cabe la supresión de instrumentos o de órganos que puedan trabajar en la lucha contra el tráfico ilegal de personas.

La enmienda número 178, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, no se puede aceptar por considerarse innecesaria y la número 179, a la disposición adicional cuarta, no se acepta toda vez que en los Presupuestos Generales del Estado se

recogen previsiones específicas para la distribución de recursos dirigidos a la integración de los inmigrantes.

No se acepta la modificación propuesta en la enmienda número 90, del Bloque Nacionalista Galego, ya que el texto de reforma clarifica la situación procedimental ya existente.

La enmienda número 91 no se acepta ya que es más coherente el texto del proyecto de reforma.

Respecto de la enmienda número 98, presentada por Coalición Canaria, consideramos que no es procedente descender en una Ley Orgánica al régimen de creación, funcionamiento y organización de una subcomisión bilateral de cooperación.

La enmienda número 128, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a la disposición adicional tercera, no se acepta ya que entendemos que se basa en una interpretación errónea del artículo primero de la Ley Orgánica.

Para finalizar, debo manifestar que el hecho de que en la materia que me ha tocado defender no se haya admitido ninguna enmienda no quiere decir que no se hayan estudiado las mismas y que no se vayan a seguir estudiando hasta el día del Pleno. Creo que por nuestra parte ha quedado claro que pensábamos que era necesaria esta reforma. Así se ha hecho, admitiendo en el Congreso numerosas enmiendas de sus grupos, lo que demuestra nuestra actitud y talante, que reitero que seguirá en la misma línea hasta el mismo día de la votación en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Bonilla Domínguez.

Para terminar el turno en contra, tiene una vez más la palabra la Senadora Vindel López.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré muy brevemente para oponerme al total de 26 enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado a los artículos 52 a 66, que se concretan en 11 enmiendas del Grupo Mixto, de los Senadores Cámara y Cabrero, concretamente las números 41 a 52; cuatro enmiendas también del Grupo Mixto, del Senador Quintana, números 86 a 89; tres enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, de la número 95 a la número 97; cinco enmiendas del Grupo Socialista, de la número 112 a la número 117; una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la 127; una enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, la número 153, y una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, que es la número 175. Todas estas enmiendas, señor Presidente, se dirigen al artículo 52, de infracciones leves; al artículo 53, infracciones graves; artículo 54, infracciones muy graves; artículo 55, sanciones; artículo 57, expulsión; artículo 58, efectos de la expulsión y la devolución; artículo 60, el retorno; artículo 61, medidas cautelares; artículo 62, ingreso en centros de internamiento; artículo 63, procedimiento preferente; artículo 64, ejecución de

expulsión; artículo 65, carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros y, por último, artículo 66, obligaciones de los transportistas.

Con carácter general, déjenme que les diga que España tiene adquiridos unos compromisos internacionales que no puede dejar de lado de ninguna manera. Es el marco comunitario, es nuestro principal referente, y me estoy refiriendo al Tratado de Amsterdam, a Schengen y a Tampere. Además, estamos obligados a conjugar estos compromisos con el artículo 13 de la Constitución, especialmente con sus números 1 y 2.

Saben sus señorías que el Tratado de Amsterdam introduce una novedad relevante de presente y de futuro al decir que la política de inmigración será la política de la Unión que formará parte del primer pilar y que superará entonces la situación actual de una mera política de cooperación intergubernamental propia del tercer pilar de la Unión Europea.

Los Estados miembros de la Unión acordaron en octubre del año pasado que se debía garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de sus Estados. Y el Consejo de Tampere insistió en sus conclusiones en la legalidad de la residencia como requisito previo para el reconocimiento de derechos a los ciudadanos de terceros países.

El Grupo Parlamentario Popular considera que España debe dotarse exactamente de los mismos instrumentos jurídicos que el resto de países para controlar la inmigración si no se quiere que en una década esta cuestión sea un auténtico problema de Estado.

Las modificaciones que introduce el proyecto son dobles. Por un lado, hay medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal y hay mejora de los mecanismos para evitarla. Se han añadido, además, sanciones a las compañías de transporte y a los transportistas, medida exigida por Schengen, así como las que van contra los que organizan redes para el tráfico de seres humanos.

Se introduce como infracción sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en territorio español, cosa que la Ley vigente no permite, y se contempla, asimismo, como infracción, la situación del extranjero trabajando sin permiso de trabajo ni autorización de residencia. El objetivo de tal medida es evitar que los extranjeros realicen actividades laborales clandestinamente sin los derechos y obligaciones que les corresponden como trabajadores, y a este respecto les recuerdo el procedimiento sancionador que se inicia por acta de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social al empresario.

Se delimitan asimismo claramente las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como ya les he dicho. Se corrige la laguna de la Ley vigente estableciéndose un procedimiento preferente para la tramitación y resolución de los expedientes de expulsión. Se garantiza la tutela judicial a los solicitantes de asilo y se recoge la necesidad de notificar la resolución de expulsión con indicación de los recursos, el plazo y el órgano ante el cual se debe presentar, de conformidad todo ello con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

De las enmiendas presentadas, señor Presidente, algunas son contradictorias porque recogen como infracción la no posesión del permiso de trabajo cuando resulta que otras suprimen la exigencia del requisito del permiso de trabajo. Por tanto, nos oponemos a ellas. Otras limitan la posibilidad de actuación del Estado contra el tráfico de seres humanos, a lo que nos oponemos también frontalmente. Algunas olvidan que los artículos son obligaciones introducidas por los acuerdos Schengen directamente. Otras también ignoran que todo acto administrativo es recurrible de conformidad con la normativa al respecto y que, además, los extranjeros afectados tienen derecho a asistencia jurídica gratuita sean residentes o no. Y por último, algunas olvidan los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de asilo, la normativa nacional sobre asilo y, sobre todo, señor Presidente, el apoyo que ACNUR viene prestando al Gobierno y a las ONGs.

Por todo ello, nos oponemos, señorías, a su incorporación al informe de la Ponencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.

Terminado el turno en contra iniciamos el de portavoces.

¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Mixto? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.

El señor RÍOS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quería estimular al Grupo Parlamentario Popular a que haga un esfuerzo máximo en estos días para que nos pueda ofrecer alguna rosa sin espinas. (*Risas.*)

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos.

¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

¿Entesa Catalana de Progrés? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (*Pausa.*)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor Presidente, intervengo a los solos efectos de cortesía, a pesar de que va a quedar constancia en el «Diario de Sesiones» de las espinas que una lleva encima.

Quiero darles a todos las gracias por sus intervenciones y por el interés que han mostrado por este proyecto de ley.

No les quepa duda; no creo que se vayan a poder aprobar las 180 enmiendas —también se lo digo—, pero ustedes saben que tanto por el Grupo Parlamentario Socialista, como por el Grupo Parlamentario Popular, se van a hacer todos los esfuerzos que sea posible y más si cabe, aunque

sólo nos queden siete días —que a mí me parecen una eternidad, para qué les voy a engañar—, siete días que, por cierto, pueden dar mucho de sí.

Vamos a ponernos a ello. Si hay acuerdo sobre el núcleo fundamental que nos divide en estos momentos, y que saben sus señorías perfectamente cuál es, seguramente otras enmiendas podrán ser retiradas.

En todo caso, les repito mi agradecimiento a todos.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.

Finalizado el debate, y de acuerdo con el artículo 116 del Reglamento de la Cámara, se va a someter a votación el texto del informe de la Ponencia, que es coincidente con el remitido por el Congreso de los Diputados, en el bien entendido de que su aprobación implica el rechazo de todas las enmiendas presentadas y no retiradas en esta Comisión —no se ha retirado ninguna— a efectos, por tanto, de su mantenimiento en su caso como votos particulares para el Pleno.

Por tanto, vamos a proceder a la votación del informe de la Ponencia. Propongo que se vote todo en conjunto para resolver este trámite con una sola votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, siete; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe y rechazadas las enmiendas presentadas.

Señorías, solicito que indiquen quién efectuará ante el Pleno la presentación del dictamen según lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento.

Tiene la palabra, Senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular propone que sea su señoría el encargado de presentarlo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Sin más asuntos que tratar, y recordándoles que la Comisión celebrará sesión el día 18 de diciembre a las cinco y media de la tarde con la comparecencia del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, señor Rajoy, a petición propia, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y treinta minutos.